



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO



TESIS

**La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante
del grupo familiar como limitante del ius puniendi**

Autor

Bach. Espinoza Vásquez Víctor Almagro

Asesor:

Dr. Hernández Canelo Rafael

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO

Fecha de sustentación: 23 de febrero 2024

Lambayeque, 2024

Tesis denominada “La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar como limitante del ius puniendi”, presentada para optar el TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADO, por:

Bach. Espinoza Vásquez Víctor
Almagro
Autor

Dr. Hernández Canelo Rafael
Asesor

APROBADO POR:

Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Presidente del Jurado

Mag. CÉSAR VARGAS RODRIGUEZ
Secretario del Jurado

Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

Dedicatoria

A mi padre Víctor José -mi primer maestro- por su confianza y apoyo incondicional a lo largo de mi formación profesional.

A mi madre Artemisa -mi luchadora, la más emocionada con la tesis- por su esfuerzo y sacrificio, por todo lo que me ha dado y enseñado a lo largo de la vida.

A mis hermanos Karen y Jefferson -mis fieles compañeros de vida- por los ánimos brindados.

Agradecimiento

A Dios, por guiarme y darme sabiduría en todo momento.

A mi asesor Dr. Rafael Hernández Canelo, por sus aportes profesionales, orientaciones, paciencia y motivación en mi etapa de investigador.

A mis profesores de la Escuela Profesional de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, por los conocimientos compartidos a lo largo de mi formación.

A la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Lesiones y Agresiones contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de José Leonardo Ortiz, porque me dio la oportunidad de conocer a excelentes personas, quienes han contribuido en mi desarrollo personal y profesional.

A mis padres, por la confianza y por coadyuvar en la materialización de mis sueños.

A mi familia, en especial a mis tíos-padrinos Javier y Noemí, a mis primos Aldo y Mónica, por haberme brindado su hogar, cariño, comprensión y consejos.

A mis amigos, por los ánimos y apoyo constante.

Y a todas las personas que me apoyaron en la realización de este trabajo.



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLITICA
UNIDAD DE INVESTIGACION



ACTA DE SUSTENTACIÓN

ACTA DE SUSTENTACIÓN PRESENCIAL N° 16-2024-UI-FDCP

Sustentación para optar el Título de ABOGADO de: Víctor Almagro Espinoza Vásquez.
Siendo las 12:30 m. del día viernes 23 de febrero del 2024 se reunieron en la sala de simulación de audiencias 1 de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", los miembros del jurado evaluador de la tesis titulada: "**LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE AGRESIONES CONTRA LA MUJER O INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR COMO LIMITANTE DEL IUS PUNIENDI**", designados por Resolución N° 246-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 05 de noviembre del 2021, con la finalidad Evaluar y Calificar la sustentación de la tesis antes mencionada, por parte de los Señores Catedráticos:

PRESIDENTE : Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE.

SECRETARIO : Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ.

VOCAL : Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA

La tesis fue asesorada por Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO, nombrada por Resolución N° 246-2021-FDCP-VIRTUAL de fecha 05 de noviembre del 2021.


El acto de sustentación fue autorizado por Resolución N° 83-2024-FDCP-VIRTUAL de fecha 20 de febrero del 2024.


La tesis fue presentada y sustentada por el bachiller Víctor Almagro Espinoza Vásquez y tuvo una duración de 30 minutos. Después de la sustentación y absueltas las preguntas y observaciones de los miembros del jurado; se procedió a la calificación respectiva, obteniendo el siguiente resultado: APROBADA con la nota de 7 (DIECISIETE) en la escala vigesimal, mención de BUENO.

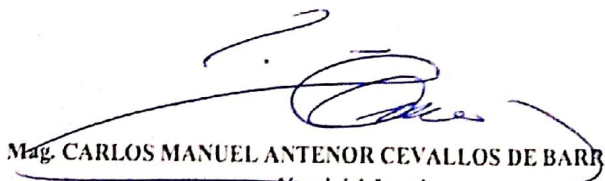
Por lo que queda APTA para obtener el Título Profesional de ABOGADO, de acuerdo con la Ley Universitaria 30220 y la normatividad vigente de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Siendo las 1:50 p.m., del mismo día, se da por concluido el acto académico tomando la juramentación respectiva y suscribiendo el Acta los miembros del jurado.

Lambayeque, viernes 23 de febrero del 2024


Dr. AMADOR MONDOÑEDO VALLE
Presidente del Jurado


Mag. CESAR VARGAS RODRIGUEZ
Secretario del Jurado


Mag. CARLOS MANUEL ANTENOR CEVALLOS DE BARRENECHEA
Vocal del Jurado.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE ORIGINALIDAD DE TESIS

Yo, Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO, Docente/ Asesor de tesis/ Revisor del trabajo de investigación del bachiller en DERECHO Víctor Almagro Espinoza Vásquez, Titulada LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE AGRESIONES CONTRA LA MUJER O INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR COMO LIMITANTE DEL IUS PUNIENDI, luego de la revisión exhaustiva del documento constato que la misma tiene un índice de similitud de 18% verificable en el reporte de similitud del programa Turnitin.

El suscrito analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender la tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Lambayeque, 29 de mayo del 2023



Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

DNI: 40997649

ASESOR



Bach. Víctor Almagro Espinoza Vásquez

DNI: 71482138

Autor

La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar como limitante del ius puniendi

INFORME DE ORIGINALIDAD

18%	18%	6%	11%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.unprg.edu.pe:8080 Fuente de Internet	3%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
3	repositorio.unsa.edu.pe Fuente de Internet	1%
4	repositorio.unheval.edu.pe Fuente de Internet	1%
5	repositorio.autonoma.edu.pe Fuente de Internet	1%
6	dspace.unl.edu.ec Fuente de Internet	1%
7	Submitted to Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Trabajo del estudiante	1%
8	Submitted to Universidad Andina del Cusco Trabajo del estudiante	1%



Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

DNI: 40997649

ASESOR

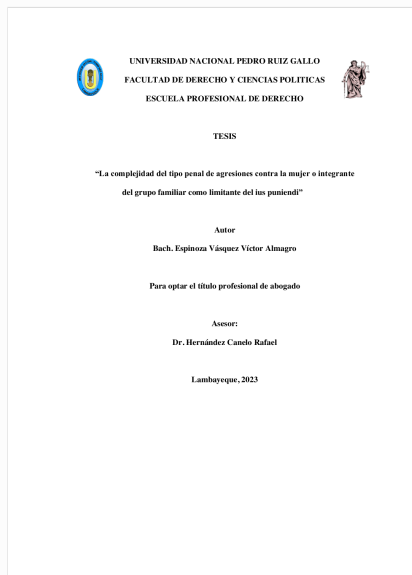


Recibo digital

Este recibo confirma que su trabajo ha sido recibido por **Turnitin**. A continuación podrá ver la información del recibo con respecto a su entrega.

La primera página de tus entregas se muestra abajo.

Autor de la entrega: Victor Almagro Espinoza Vasquez
Título del ejercicio: REVISIÓN DE TESIS
Título de la entrega: La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer...
Nombre del archivo: TESIS_ESPINOZA_VASQUEZ_VICTOR_ALMAGRO.docx
Tamaño del archivo: 772.1K
Total páginas: 103
Total de palabras: 17,829
Total de caracteres: 93,009
Fecha de entrega: 29-may.-2023 04:56p. m. (UTC-0500)
Identificador de la entrega: 2104806592



Derechos de autor 2023 Turnitin. Todos los derechos reservados.

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

DNI: 40997649

ASESOR

Índice

Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Índice	v
Índice de tablas	ix
Índice de ilustraciones	xi
Resumen	xiii
Abstract	xiv
Introducción	15
Capítulo I.....	18
Los aspectos metodológicos de la investigación	18
1.1. El planteamiento del problema	18
1.2. La formulación del problema de investigación	19
1.3. La justificación de la investigación	19
1.4. La importancia de la investigación.....	20
1.5. Los objetivos de la investigación	21
1.5.1. El objetivo general	21
1.5.2. Los objetivos específicos	21
1.6. La hipótesis de la investigación.....	22
1.7. Las variables de la investigación.....	22

1.7.1. Sobre la variable independiente.....	22
1.7.2. Sobre la variable dependiente.....	22
1.8. Los métodos aplicados en la investigación	22
1.8.1. El método exegético jurídico.....	22
1.8.2. El método sistemático jurídico	23
Capítulo II	24
La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar.....	24
2.1. Los trabajos previos a la investigación	24
2.2. El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar.....	28
2.3. La complejidad en los tipos penales.....	31
Capítulo III	34
La teoría del ius puniendi y la acreditación del hecho delictivo	34
3.1. El ius puniendi y los fines de la pena	35
3.1.1. Teoría de la retribución	36
3.1.2. Teoría de la prevención	37
3.1.3. Teoría mixta.....	38
3.2. La acreditación del hecho delictivo.....	39
Capítulo IV	41
Análisis de los resultados de la investigación	41

4.1. Análisis jurisdiccional	41
4.2. Resultados de la opinión de los operadores jurídicos.....	49
Capítulo V	61
La contrastación de la hipótesis	61
5.1. La discusión de los resultados de la investigación	62
5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Interpretar el tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar, a fin de reconocer su complejidad”	62
5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Estudiar la teoría del ius puniendi para reconocer los elementos que permiten la acreditación del hecho delictivo”	70
5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar el nivel de intervención del ius puniendi por la acreditación del hecho delictivo respecto a las agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar en la Fiscalía Especializada en estos delitos de José Leonardo Ortiz entre los años 2019 y 2021”	75
5.1.4. Discusión sobre el objetivo específico: “Proponer el acondicionamiento de especificaciones técnicas que permitan el reconocimiento de la acción delictiva, a fin de acreditar la responsabilidad del agente de una manera más eficiente”	78
5.2. Validación de las variables.....	80
5.2.1. Sobre la variable independiente: “La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar”	80

5.2.2. Sobre la variable dependiente: “La intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo”	81
5.3. Contrastación de la hipótesis	84
Conclusiones	85
Recomendaciones	88
Bibliografía.....	89
Anexos.....	92
1. Formulario de encuesta a los expertos en derecho	92
2. Trámite de acceso a resoluciones judiciales del Poder Judicial del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo	95

Índice de tablas

Tabla 1: Análisis de sentencias por el delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.....	41
Tabla 2: El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar describe una acción violentista en contra de estos sujetos con la orientación de identidad de género.	49
Tabla 3: La configuración del tipo penal de agresiones se describe como uno de carácter complejo, pero no condiciona al juzgador la evaluación bajo estas características en cuanto a la acreditación del hecho delictivo.	51
Tabla 4: Debe adecuarse la construcción del tipo penal de agresiones en el Código Penal, a fin de establecer un parámetro que permita al juzgador asumir un criterio evaluador en función a la complejidad del tipo para reconocer el aspecto objetivo y subjetivo de la conducta.	53
Tabla 5: El Ius Puniendi es una potestad que tiene el Estado para intervenir ante la existencia de actos que operan fuera de lo permitido de acuerdo al sistema jurídico, a fin de imponer una sanción y conseguir la reeducación, resocialización y reinserción del delincuente a la sociedad.	55
Tabla 6: La acción del Ius Puniendi requiere de la correcta identificación o acreditación del hecho delictivo, a fin de imputar responsabilidad para poder sancionar, lo cual en el caso de los tipos penales complejos precisa de la evaluación objetiva y subjetiva de la acción, lo cual no se advierte en el tipo de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.	57
Tabla 7: Es necesaria una acción directa sobre la base típica del delito de agresiones a fin de que impulse la acción evaluadora del juzgador sobre el criterio	

de complejidad del tipo respetando la acción del Ius Puniendi en función a la correcta acreditación del hecho delictivo y la responsabilidad penal.	59
Tabla 8:Contrastación de la hipótesis.....	84

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Gráfica porcentual de la afirmación: El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar describe una acción violentista en contra de estos sujetos con la orientación de identidad de género . 50

Ilustración 2: Gráfica porcentual de la afirmación: La configuración del tipo penal de agresiones se describe como uno de carácter complejo, pero no condiciona al juzgador la evaluación bajo estas características en cuanto a la acreditación del hecho delictivo. 52

Ilustración 3: Gráfica porcentual de la afirmación: “Debe adecuarse la construcción del tipo penal de agresiones en el Código Penal a fin de establecer un parámetro que permita al juzgador asumir un criterio evaluador en función a la complejidad del tipo para reconocer el aspecto objetivo y subjetivo de la conducta.” 54

Ilustración 4: Gráfica porcentual de la afirmación: El Ius Puniendi es una potestad que tiene el Estado para intervenir ante la existencia de actos que operan fuera de lo permitido de acuerdo al sistema jurídico a fin de imponer una sanción y conseguir la reeducación, resocialización y reinserción del delincuente a la sociedad 56

Ilustración 5: Gráfica porcentual de la afirmación: La acción del Ius Puniendi requiere de la correcta identificación o acreditación del hecho delictivo, a fin de imputar responsabilidad para poder sancionar, lo cual en el caso de los tipos penales complejos precisa de la evaluación objetiva y subjetiva de la acción, lo cual no se advierte en el tipo de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 58

Ilustración 6: Gráfica porcentual de la afirmación: Es necesaria una acción directa sobre la base típica del delito de agresiones, a fin de que impulse la acción evaluadora del juzgador sobre el criterio de complejidad del tipo respetando la acción del Ius Puniendi en función a la correcta acreditación del hecho delictivo y la responsabilidad penal. 60

Resumen

El título de la investigación “La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar como limitante del ius puniendi” se ha compuesto por la intervención de dos variables que describen los conceptos tomados de la realidad jurisdiccional, en tanto que se apreció en la calificación del tipo penal, ausencia del elemento normativo “por su condición de tal”, el mismo que se advierte como un factor que no permite la correcta intervención del ius puniendi. El resultado que se ha logrado advertir es precisamente una condición punitiva incompleta al momento de aplicar el artículo 122- B del Código Penal, por lo que se propone la incorporación de características específicas que condicionen la participación del profesional de la psicología que permita acreditar la condición volitiva del agente, vinculada con la intención de lesionar a la mujer por su condición de tal, esto es una razón de odio por las mujeres. Se pretende que con esta propuesta se anule la condición limitante de la acción del ius puniendi advertida por la ausencia de calificación del elemento normativo “por su condición de tal” en el delito de agresiones.

Palabras clave: **Complejidad, Agresiones, Mujer, Ius puniendi.**

Abstract

The title of the investigation "The complexity of the criminal type of aggressions against the woman or member of the family group as a limitation of the ius puniendi" has been composed by the intervention of two variables that describe the concepts taken from the jurisdictional reality, while Appreciated in the classification of the criminal type, absence of the normative element "due to its condition as such", the same that is noted as a factor that does not allow the correct intervention of the ius puniendi. The result that has been observed is precisely an incomplete punitive condition at the time of applying article 122 B of the Penal Code, for which the incorporation of specific characteristics that condition the participation of the psychology professional that allows accrediting the volitional condition is proposed. of the agent, linked with the intention of injuring the woman because of her status as such, this is a reason for hatred for women. It is intended that with this proposal the limiting condition of the action of the ius puniendi warned by the absence of qualification of the normative element "by its condition as such" in the crime of aggressions is annulled.

Keywords: Complexity, Aggressions, Woman, Ius puniendi.

Introducción

Esta tesis tiene por título “La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar como limitante del ius puniendi”, lo cual deviene en motivación de la realidad jurisdiccional, esto sin duda tiene que ver con la revisión de las sentencias que se han generado en función a la denuncia por agresiones bajo la tipología del artículo 122 – B, del Código Penal peruano, lo que no se aprecia como una construcción correctamente motivada, en cuanto no se ha realizado ni en sede fiscal ni tampoco a nivel de juzgado penal, la calificación completa de la acción delictiva.

Esto se indica en tanto que dicha calificación no contempla al elemento normativo “por su condición de tal” que forma parte del tipo penal, quiere decir que la motivación de las resoluciones que condenan o absuelven por la acción delictiva del tipo de agresiones, no resulta ser completa, en tanto que solamente califica la acción en base al resultado lesivo, pero no advierte el nivel de complejidad de la tipología. Vale decir que el nivel en que interviene punitivamente el Estado a través del sistema de justicia resulta incompleta, en tanto se precisa de una correcta calificación de precisamente el elemento normativo que condiciona a una situación de voluntad de agredir por una razón de género.

Es en virtud de ello que se ha construido la parte metodológica de la investigación contemplada en el Capítulo Primero, en el que se plasma el planteamiento del problema y la construcción de un cuestionamiento que formula la problemática de la siguiente manera: ¿Qué efecto genera la complejidad del tipo

penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar sobre la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo?

De igual modo dentro de este capítulo se encuentra la respuesta a la pregunta anterior en función al conocimiento previo a la investigación, esto es un resultado a priori, el cual indica: La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar produce un efecto negativo sobre la eficaz intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo.

Además de lo señalado se consideraron los objetivos tanto general, así como los específicos que se plantean como las metas de la investigación, las cuales han permitido construir el contenido de la tesis en función a los métodos de análisis de la realidad mediante la observación y la interpretación jurídica desde la perspectiva de análisis exegético y sistemático jurídico.

Luego en el Capítulo Segundo se ha planteado la descripción de las razones o fundamentos teóricos que permiten advertir la condición de complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer y los miembros del grupo familiar, lo cual se ha desarrollado teniendo en cuenta los antecedentes o trabajos previos de la investigación y que se ha secundado con la incorporación descriptiva del tipo penal propiamente dicho, con el enfoque específico de la atención especial que se ha tenido en la construcción del tipo, sobre la condición de tal de la mujer que resulta ser agredida.

El Capítulo Tercero se ha diseñado en torno a la teoría del ius puniendi que le compete como potestad al Estado, a fin de establecer control sobre las acciones delictivas, con la intención de establecer su lineamiento con la acreditación del hecho delictivo lo que se ha previsto debe estar contemplada y ejecutada de manera completa en función a los elementos que constituyen la tipología penal.

Conforme a lo planteado, en el Cuarto Capítulo se ha desarrollado el análisis de la realidad en función a los resultados planteados al observar las resoluciones tanto condenatorias, así como las absolutorias, en las que se plantea únicamente un análisis y determinación en razón de la acreditación del resultado de la acción delictiva como agresión en contra de la mujer, pero no se acredita la condición volitiva del agente sobre la acción intencional derivada del odio contra la mujer por su condición de tal.

Estos resultados han permitido generar la síntesis que conllevó a contrastar el planteamiento hipotético inicial observándolo como una corroboración, lo cual se plasma en el Quinto Capítulo en esta tesis, puesto que se ha discutido cada uno de los objetivos en función de los contenidos y con ello se adoptaron las tomas de postura determinando así la conclusión general y las específicas que corresponden este trabajo académico.

El Autor.

Capítulo I

Los aspectos metodológicos de la investigación

1.1.El planteamiento del problema

Estudiar las condiciones en que se producen actos de violencia familiar parte de la vivencia profesional experimentada en el Ministerio Público, toda vez que se aprecia un problema relacionado con la diferencia entre los casos archivados y aquellos en los que se genera acusación fiscal. Dicha circunstancia se identifica a través de un factor estructural en la construcción típica que describe este tipo de actos y que se contiene en el articulado del ordenamiento jurídico en su numeral 122-B; así se cuestiona ¿Qué efecto genera la complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar sobre la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo?

Se proyecta el análisis de la realidad e interpretación de la propia regla que conlleven al reconocimiento de los factores específicos contenidos en el tipo penal que estarían generando un problema sobre el criterio del fiscal para acreditar la existencia de responsabilidad en función al tipo penal descrito respecto a la violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar. Todo ello se puede reconocer como una alteración sobre aquella manera en que se produce la acción interventora de la organización estatal mediante el ius puniendi; circunstancia que conlleva un problema relacionado con el riesgo que supone la alteración de la

seguridad jurídica, en tanto que la certeza de los hechos que se investigan no se traduce de forma adecuada al proceso penal.

Es por ello que con el resultado de la investigación se pretende sugerir el acondicionamiento de especificaciones técnicas que permitan el reconocimiento de la acción delictiva a fin de acreditar la responsabilidad del agente de una manera más eficiente.

1.2. La formulación del problema de investigación

¿Qué efecto genera la complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar sobre la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo?

1.3. La justificación de la investigación

En función al sentido justificante que debe operar en toda investigación se ha ubicado en primer lugar lo relacionado con el aspecto social, toda vez que la consecuencia que se advierte del problema planteado es precisamente la desestabilidad del equilibrio social que se presume ha de generar el control jurídico que se produce en función de las reglas; para este caso problemático se ha identificado dicho efecto en relación con la complejidad del tipo penal que se ocupa de las agresiones en el ámbito familiar, que produce efectos en su aplicación generadores de una sensación de inseguridad en la población, lejos de los fines que se supone debería propiciar acciones que proyecten intervenir al Estado según sus funciones punitivas de control de la criminalidad.

Del mismo modo se ha podido referenciar teóricamente un elemento justificante para el desarrollo temático de este trabajo académico, el aspecto netamente jurídico, puesto que su estructura descriptiva de la acción como un delito, tendría un problema sobre la especificación respecto a la conducta que describe, lo cual conlleva a la insuficiente acreditación de las acciones que se presumen como delitos, elemento base que permitan reconocer al responsable de la acción penal y por ende para que sea aplicada una medida sancionadora como son las penas en sus diversas formas; por todo ello es que se proyecta la revisión no solo de esta construcción típica del artículo 122-B del Código Penal, sino también de los aspectos doctrinarios y comparativos que permitan dilucidar las razones que generan su ineficacia con el fin de sugerir los cambios necesarios para mejorar un efecto adecuado de las garantías que ha de ofrecer esta construcción legal.

1.4. La importancia de la investigación

En cuanto al sentido de la importancia que debe identificarse respecto al desarrollo de esta investigación, debe considerarse como tal en razón de que los resultados de la evaluación que se realice sobre el tipo penal de agresiones contemplado en el artículo 122-B del Código Penal, permitirá identificar los factores existente o ausentes en su construcción que estarían causando la ineficacia de este para alcanzar que sea reconocido en un término adecuado las condición de responsable del sujeto que accionó ilícitamente para que en el ámbito penal sea posteriormente sancionado.

Del mismo modo teniendo en cuenta dichos resultados se puede reconocer la importancia debido al tipo de beneficiarios de tal estudio, así pues, con los resultados estarían beneficiados todos los ciudadanos en tanto que se asegura la estabilidad de seguridad ciudadana en base al aspecto jurídico adecuado; entre tanto que teniendo en cuenta una condición particular de la observación, se estaría beneficiando la seguridad personal e integridad de las mujeres y miembros del grupo familiar violentados.

1.5. Los objetivos de la investigación

1.5.1. El objetivo general

Determinar el efecto que genera la complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar sobre la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo.

1.5.2. Los objetivos específicos

- Interpretar el tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar, a fin de reconocer su complejidad.
- Estudiar la teoría del ius puniendi para reconocer los elementos que permiten la acreditación del hecho delictivo.
- Analizar el nivel de intervención del ius puniendi por la acreditación del hecho delictivo respecto a las agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar en la Fiscalía Especializada en estos delitos de José Leonardo Ortiz entre los años 2019 y 2021.
- Proponer el acondicionamiento de especificaciones técnicas que permitan

el reconocimiento de la acción delictiva, a fin de acreditar la responsabilidad del agente de una manera más eficiente.

1.6. La hipótesis de la investigación

La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar produce un efecto negativo sobre la eficaz intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo.

1.7. Las variables de la investigación

1.7.1. Sobre la variable independiente

La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar.

1.7.2. Sobre la variable dependiente

La intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo.

1.8. Los métodos aplicados en la investigación

1.8.1. El método exegético jurídico

Se ha considerado apropiada la intervención de este método con la finalidad de poder relacionar la construcción gramatical de la regla que se observa cómo es la tipología que describe la acción delictiva como agresiones en el cuerpo normativo jurídico punitivo, con el propio sentido que se pretendió controlar al momento de que el legislador concibiera la posibilidad jurídica para crearlo. Esta descripción permitió establecer un orden en cuanto a los elementos que componen el tipo penal,

es así como se alcanza a reconocer la existencia del elemento normativo “por su condición de tal”, el cual ha de ser evaluado en la calificación del hecho delictivo para poder subsumir correctamente a la realidad.

1.8.2. El método sistemático jurídico

La secuencia de actos académicos que permiten observar las situaciones o hechos fácticos que se basan en un sentido interpretativo sobre el carácter jurídico, lo cual conlleva una participación de este tipo de evaluación normativa que se dirige a la verificación del artículo 122-B ubicado en el ordenamiento jurídico punitivo, ello con la intención de obtener una verificación de la forma en que se acopla al resto de la estructura jurídica, basándose principalmente en la observación de su vínculo hacia la estructura normativa constitucional, con el fin de observar si se cumple con la expectativa de garantismo constitucional que ofrece el ordenamiento. Siendo así de otro lado también se tomará en consideración el sentido interpretativo de acuerdo a los parámetros que se encuentran ordenando la estructura de punición en el Perú, para desarrollar el control penal, con lo cual se ha logrado verificar si su aplicación no restringe alguna otra regla o la contraviene.

Capítulo II

La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar

2.1. Los trabajos previos a la investigación

Bautista Peña (2019), en su investigación de tesis titulada: “Represión punitiva en el delito de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar y su implicancia al principio de mínima intervención del derecho penal, en las sedes judiciales de la provincia de Arequipa, incidencia en el año 2017”, presentada en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, concluye que:

El poder punitivo, expresada en la pena, es una facultad sancionadora del Estado, que permite la convivencia de las personas en la comunidad y garantiza el restablecimiento del orden jurídico. Esta facultad sancionadora que ostenta el Estado no es absoluta, tiene límites materiales o formales, representados por principios que se fundamentan en el respeto de la dignidad humana. Los límites materiales al poder punitivo del Estado se dan al momento de la creación de la norma jurídico penal, aquí encontramos al Principio de Legalidad, Mínima Intervención del Derecho Penal, Racionalidad y Humanidad de las penas, Culpabilidad y Proporcionalidad. Mientras que los límites formales o garantías procesales se encuentran reflejados en la ejecución de la norma penal, aquí encontramos al principio del Debido Proceso, Presunción de Inocencia, Derecho de Defensa, Publicidad del Proceso y Derecho a Pluralidad de Instancia. Respecto al Principio de Mínima Intervención del Derecho Penal o Última Ratio, implica que el Derecho Penal solo debe intervenir en la esfera del ciudadano cuando sea

estrictamente necesario para salvaguardar bienes jurídicos de mayor trascendencia, pues las ofensas menores corresponden a otras ramas del Ordenamiento Jurídico. (pág. 187)

García Loaiza (2018), en el trabajo académico jurídico que ha titulado “La aplicación de la pena en el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en los Juzgados Penales de Urubamba 2018”, que ha sido ejecutada ante la Universidad César Vallejo para obtener el grado de “Maestra en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal”.

Plantea el investigador como resultado de su análisis que: “(...) no existe relación significativa entre aplicación pena y la comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en los juzgados penales de Urubamba en el año 2018, por lo que se plantea la hipótesis alterna que indica que existen otros factores (socioeconómicos, psicológicos y culturales) los que se relacionan significativamente e influyen en la comisión del delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar; asimismo, los factores específicos de cada caso concreto influirán mediante los hechos fácticos y aspectos jurídicos que motivan en cada caso en particular”. (pág. 104)

Garrido, Postillo & Tarazona (2018), en su investigación de tesis “Estudio de la ineffectividad de la tipificación del delito de agresiones contra la mujer dentro de la familia para acusar al agresor en el distrito fiscal de Huánuco – 2017”, presentada en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, para obtener el título profesional de abogado, entre sus conclusiones se tiene:

Tipificar las agresiones físicas menores a diez días de atención médica o descanso para el trabajo, por el solo hecho de ser mujeres no resulta racional ni proporcional para la intervención del Derecho Penal a través de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Huánuco, no solo porque el artículo 122- B del Código Penal no está cumpliendo su objetivo, sino porque mover el aparato estatal para casos sin futuro (archivado) genera un crecimiento desmesurado de la carga laboral para el Ministerio Público y gastos al Estado. La tipificación del delito de agresiones contra las mujeres ocurridas dentro de la familia en el distrito fiscal de Huánuco 2017, no contribuye a prevenir, erradicar y sancionar al agresor, dado que la norma penal no se adecua a la realidad. (pág. 155)

Igualmente, es necesario citar a Orozco López (2020), quien en su investigación de tesis: “Inaplicación de la pena suspendida en el delito de violencia familiar en la primera fiscalía Los Olivos, 2018”, desarrollada en la Universidad César Vallejo, para optar por el título profesional de abogado, concluye:

Existen razones jurídicas que permiten asumir una postura prohibitiva respecto a la acción que suspende la sanción, lo cual no es compatible con la finalidad que ha sido trazada para la acción del derecho penal; esto se debe a que los cambios advertidos en el numeral 57 del ordenamiento sustantivo penal, referido a los actos violentos en el ámbito de la familia, no ha generado una disminución de las denuncias por este tipo de casos. Tal situación es considerada como una condición que sale del ámbito de la dignidad del ser en tanto humano, esto es lo que se vive en “(...) los establecimientos penitenciarios, en donde no se aplican políticas de reeducación ni mucho menos de resocialización. Por lo que, sancionar con pena

efectiva los tipos de lesiones producidos entre miembros de una familia no resulta compatible con los principios penales, por cuanto se contraviene significativamente el principio proporcionalidad de la pena y el de ultima ratio pues no se están considerando las circunstancias de cada caso y los mecanismos alternativos que existen en el derecho penal y en otras ramas del ordenamiento jurídico”. (Orozco López, 2020, pág. 27)

Quispe Ruíz (2019), en su investigación de tesis “Ineficacia del Derecho Penal y la reducción de la violencia familiar, lima sur 2018-2019”, presentada en la Universidad Autónoma del Perú, para obtener el título profesional de abogado, concluye lo siguiente:

La criminalización de la familia y el aumentar las penas para fijar las sanciones más drásticas contra el agente que incurre en actos de violencia contra los integrantes de la familia se ha convertido es una respuesta contraria a los valores fundamentales. Un Estado de Derecho como el nuestro de proteger al individuo no solo mediante el Derecho Penal; de manera tal que, la política criminal desplegada por el Estado para estos delitos no está funcionando, porque a pesar de las sanciones más duras y tipificar conductas que suponen formas nuevas, esto no ha logrado una disminución del índice delictivo muy al contrario la tasa va en aumento; además, el Derecho Penal se ha divorciado de los principios fundamentales de un derecho penal propio de un estado social, satisfaciendo a la prensa amarilla o prensa amarillista. (pág. 46)

2.2. El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar

Para el autor Pérez Pinzón (2002), la problemática sobre esta situación de actos violentos que se producen en el ámbito de la familia, que se conoce como una situación orientada por condiciones de género, esto es que se vinculan con la condición de las mujeres e incluso abarca a los que integran la estructura de la familia, la identifica como un tipo de actos violentos de origen social, en tanto que no se encuentra dentro de la comprensión en función a aquella “(...) sistémica propia de los delitos contra la familia, se encuentra íntimamente relacionado, y consecuentemente forma parte implícita de las instituciones penales tendentes a proteger a la familia”. (Pérez Pinzón, 2002)

En 1997, nuestro ordenamiento legal marcó un precedente con la positivización del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar, de conformidad con la Ley N.º 26788, se incorporaron los Art. 121-A y 122-A del Código Penal, con lo que se estableció por primera vez la inclusión del delito de lesión en violencia intrafamiliar, que si bien, inicialmente involucró solo a lesiones graves y, subsecuentemente fueron incluidas las lesiones leves o moderadas.

“A la postre, en el año 2008 con la aprobación de la Ley N.º 29282, se incorporó el Artículo 122-B del Código Penal, representando la forma o situación de un cuadro agravado por lesiones leves causadas por violencia familiar” (Bautista Peña, 2019, pág. 23).

Si bien el artículo aludido (122-B) fue derogado por la Ley N.º 30364; “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar”. Es a inicios del 2017 con la entrada en vigencia el Decreto Legislativo N.º 1323, que el Artículo 122-B fue reincorporado al Código Penal, concerniente al delito de agresiones contra los integrantes del grupo familiar; finalmente en el año 2018 se promulgó la Ley N.º 30819, que complementa circunstancias agravantes para el tipo penal en análisis.

Es habitual que en tanto se ejecuten tales acciones centradas en el ámbito de la ilicitud dentro del ámbito que comprende a la estructura familiar, puesto que los hogares suelen atravesar una condición de dificultad para llegar a un primer rango en el cumplimiento de acción que satisfagan los requerimientos básicos que corresponden a los seres humanos, esto es que no resulta posible alcanzar la mantención de la familia, sobre todo en tanto ello no se produzca dentro de los parámetros de la dignidad que le es atribuida al ser humano por su condición como tal.

Es por ello que la organización estatal tendría que orientar su preocupación hacia la construcción de estrategias o lineamientos que conlleven a un correcto control de este tipo de situación social que requiere de participación jurídica. Sin duda como se ha dicho esto se hará depender directamente del ordenamiento jurídico, dado que “(...) frente a estos conflictos sociales, el Estado pretende solucionarlos mediante leyes y normas penales que tienen fines represivos más que preventivos, como la Ley N.º 26260 modificada por la Ley N.º 27306 y la nueva Ley N.º 30364”. (García Loiza, 2018, pág. 61)

Al respecto, Peña Cabrera (2008), advierte que en la actualidad existen muchas pautas reguladoras que se instalan básicamente en el ámbito del proceso penal, puesto que se ocupan de un esquema descriptivo de hechos que se consideran como ilícitos, tal cual si lo más apropiado fuese establecer una mayor cantidad de tipos entorno al principal que es la agresión, lo cual sin duda va a acompañado de la situación proporcional de la agravante de estos supuestos típicos. Es importante señalar de la discusión sobre el objeto que se protege; sobre esto se debe señalar que el concepto señala que se trata de que un “(...) bien jurídico lesionado es un presupuesto esencial para que se configure un delito y conforme a los hechos materializados el legislador mediante los principios de proporcionalidad, culpabilidad y ofensividad debe valorar y legislar en materia penal”. (Peña Cabrera Freyre, 2016)

No obstante, la comunidad ejerce una presión social que a menudo lleva a los legisladores a imponer sanciones severas o severas por incidentes que a menudo no justifican ser alcanzados con penas privativas de libertad. Si bien las regulaciones legales no han reducido la alta tasa de criminalidad, este problema debe abordarse desde su fuente porque es un problema social.

Indistintamente, “(...) se sustenta tal posición por el carácter del Derecho Penal el cual es de ultima ratio, que puede subsidiariamente castigarse con sanciones extrapenales, empleándose en forma racional los castigos, puesto que al conformar un Estado de Derecho se debe ponderar y evitar reprimir la libertad en forma desproporcionada”. (García Loiza, 2018, pág. 63)

Como tal, la condición punitiva se ocupa precisamente de establecer sanciones, puesto que las penas se presentan como respaldo a la correcta ejecución del proceso y por ende la prevalencia del sistema de justicia, siendo que este último se encuentra en dependencia con la normativa jurídica. Es importante considerar la necesidad de controlar incluso la acción punitiva del Estado, puesto que las construcciones típicas no obedecen a una estructura confiable, dado que las penas deberán ser impuestas en un rango de proporcionalidad con la lesión que se ha producido sobre el integrante de la familia o la propia mujer que se ha convertido en la protagonista de la protección.

De lo mencionado anteriormente, se desprende que, “la intervención del Derecho Penal debe reservarse a hechos de dimensión considerable y concreta al cuerpo y/o la salud de la víctima”. (Peña Cabrera Freyre, 2016)

2.3. La complejidad en los tipos penales

Para el reconocimiento del nivel de complejidad de los tipos penales es importante tener en consideración de manera previa la manera en que funciona el sistema penal, así pues lo que da origen a la intervención de la acción punitiva del Estado es precisamente el reconocimiento de actos que van en contra de la actividad normal del ser, esto es lo que se ha establecido como correcto en el ordenamiento y que sin duda se basa en las costumbres ideales y las reglas primigenias basadas en la ética y la moral.

De acuerdo a ello es importante tener en consideración a (...) la conducta humana el punto de partida de toda relación jurídico penal y el objeto al que se agregan determinados predicados (tipicidad, antijuricidad y culpabilidad) que convierten tal conducta humana en delito, nuestro derecho penal es un derecho penal de acto y no de actor. (Granda Torres & Herrera Abrahan, 2019, pág. 221)

Según lo señalado se puede adoptar la concepción de la intervención del derecho penal con el fin de reconocer primero las acciones delictivas, esto es que salen de la actividad lícita contemplada por la sociedad, para establecer en función a ello marcaciones conceptuales de aquello que se reconoce como el tipo penal, así la construcción de estos tendrá que ceñirse a pautas específicas que permitan colegir dicha estructura con los actos de las personas en la realidad, lo que se conoce como la subsunción.

En sí los tipos penales tienen una estructura establecida, así pues, se indica que El tipo penal es una oración gramatical, que, como cualquier otra, está compuesta por una serie de elementos, que deben verificarse para concluir la tipicidad de la conducta. (Vega Arrieta, 2016, pág. 53)

Estudiar los tipos penales trae como resultado una repercusión dogmática, en tanto que esta labor realizada de manera idónea en función a la estructura propia de su construcción conlleva a la concepción de un sistema y los procesos comparativos que se refieren a las actividades humanas con lo que se muestra en el contenido del tipo mismo. Esta acción permite reconocer si está cumpliendo con los estándares requeridos o no en lo que se refiere a la descripción de la acción delictiva que permita reconocer su carácter típico.

Luego de reconocer el sentido de la construcción del tipo penal, se debe advertir que la existencia del mismo incorpora un esquema que contiene un aspecto subjetivo y otro objetivo, lo cual sin duda convierte a dicha estructura en una de carácter complejo. Para ello es importante tener en consideración el origen de la concepción, así en cuanto a lo que se refiere al carácter de complejidad se tiene al esquema finalista.

Esta concepción permite indicar que, con el esquema finalista se comienza a hablar de tipo complejo, es decir, para el esquema finalista el tipo penal ya no es nunca subjetivo, ni solo a veces subjetivo, como lo pregonan los partidarios de los esquemas clásico y neoclásico del delito respectivamente, sino que lo será siempre. Es decir, el tipo penal en un esquema finalista del delito siempre tendrá referentes objetivos y subjetivos, porque además del elemento o ingrediente especial subjetivo, que a veces aparecen en el tipo, los finalistas exigen el dolo y la culpa en el tipo. (Vega Arrieta, 2016, pág. 54)

Capítulo III

La teoría del ius puniendi y la acreditación del hecho delictivo

Lo que se pretende estudiar en este apartado de la investigación es la manera en que se produce la intervención de control que le corresponde al Estado mediante la aplicación de su potestad sancionadora frente a la acción de los sujetos que sale del esquema de lo permitido, responsabilidad que acarrea una sanción como parte del reproche que parte de la sociedad, lo que se entiende con la intención de compensar la actividad delictiva y entre otros aspectos lograr la prevención residual del delito.

En lo señalado se puede apreciar que existe justificación de este tipo de intervención estatal, puesto que la ausencia de ello traería consigo el descontrol y desequilibrio de la armonía social, por lo mismo que se halla la necesidad de crear un esquema penal que permita la actuación del poder público con el fin de establecer el orden esperado en el esquema social.

“Amén de lo expuesto, es preciso, siguiendo a Odone SANGUINÉ, está justificada por el principio constitucional de necesidad de actuación de los Poderes Públicos, consistente en el binomio integrado por la existencia simultánea de dos componentes”. (San Martín Castro, 2014, pág. 977), los cuales tienen diversas perspectivas, así en primer lugar se encuentra un elemento que se ocupa de la fáctica, lo que se representa en tanto se produzcan en el ámbito de la familia propiciando el riesgo para la colectividad en genera; además de ello se percibe un elemento desde la perspectiva jurídica, en tanto que se verifica la presencia de

garantías que devienen del principio de justificación teleológica, esto es precisamente lo que se conoce como una limitante del anterior ámbito que se ha desarrollado desde la perspectiva social; además de ello se presentan diversos fines de carácter constitucional, que se convierte en la obligación de la organización estatal ocuparse del control de las acciones delictivas desarrolladas en la colectividad.

3.1. El ius puniendi y los fines de la pena

Tal cual se ha señalado anteriormente la intervención del Estado está relacionada directamente con el poder de acción para ejercer el orden mediante el control de las actividades humanas para evitar que se ciñan a conductas fuera del margen de lo permitido, así pues se trata de una vinculación entre la función descrita que le corresponde a la política estatal y los requerimientos que se precisan cumplir para formar parte de la sociedad sin tener que afrontar la persecución por hechos delictivos.

Debe tenerse en cuenta que “El Estado está al servicio de la persona humana, es decir, tiene un fin y ese fin es el respeto del hombre en toda su amplitud y para alcanzar dicho objetivo algunas veces puede dañar a los propios administrados en la consecución del mismo”. (Gonzales Molina, pág. 4) pese a ello surgen cuestionamientos referidos a las razones para que se produzca la reparación de aquellos daños que se han producido sobre los intereses de los que participan este tipo de casos.

De acuerdo a la doctrina desarrollada sobre el tema se ubica a Dromi quien señala que la organización estatal se ocupe de atender como respuesta a la necesidad de los sujetos dado que cuentan con una existencia en el campo jurídico y político, en razón de lo cual la atención debe ser asumida en la línea de la igualdad a fin de evitar cualquier tipo de discriminación, en relación a la condición jurídica que le corresponde. Ha de tenerse en cuenta el carácter subjetivo que les corresponde a cada uno de los sujetos administrados lo cual debe ser asumido por la organización estatal a fin de brindar una tutela adecuada, en función a las condiciones procesales existentes en el rubro pertinente, como es el caso de los temas de violencia que se estudia en esta investigación.

El fundamento material del ius puniendi no es uniforme, desde el momento que existen, en dogmática, se perciben diversas posiciones acerca del sentido de la pena y de sus fines.

3.1.1. Teoría de la retribución

En la jurisprudencia la teoría de la retribución ha tenido un importante papel hasta hace poco tiempo, la sistematización de los presupuestos de punibilidad, formulados por la escuela clásica desde perspectivas retributivas se ve como un conjunto de garantías del gobernado frente al Estado y en los modelos propuestos en su reemplazo parecería estar corriendo riesgo, ello origina un rechazo de estos, además, la circunstancia de que no se haya formulado aun ningún sistema que ofrezca presupuestos de incriminación (teoría del delito) diferentes a los enunciados como consecuencia de la concepción retributiva. (Congreso de la República, 2009, págs. 1-2)

Debe comprenderse a esta teoría, en virtud de que concibe a la pena como una reacción proporcional al delito cometido, estableciendo un límite a la pretensión punitiva estatal. Empero, las críticas formuladas a esta teoría explican su progresiva decadencia que se pone de manifiesto en virtud de que la misma ha sido abandonada por la doctrina penal contemporánea al menos en su perfil ortodoxo de concepción absoluta.

Dentro de las opiniones generales sobre esta teoría, se afirma que la pena presupone la reprochabilidad del comportamiento sometido a ella y expresa esa reprochabilidad. Esta teoría es concebida como reacción por lo sucedido y desvinculada del porvenir ya que su fin es reparar el delito y no evitar delitos futuros. Esto explica la sólida interconexión establecida entre las teorías del delito y la pena. (Congreso de la República, 2009, pág. 4)

3.1.2. Teoría de la prevención

Originalmente, esta teoría de prevención renuncia a ofrecer fundamentos éticos a la pena, ella será entendida como un medio para la obtención de ulteriores objetivos, como un instrumento de motivación, un remedio para impedir el delito.

Esta teoría a su vez se subdivide en prevención especial y general. Sobre la teoría de la prevención especial, esta no busca retribuir el hecho pasado, lo que persigue es evitar las reincidencias (versión moderna de la teoría), en otros términos, “(...) ve la justificación de la pena en que debe prevenir nuevos delitos del autor. Esta concepción, influenciada por el determinismo, no admite la libertad

de voluntad, niega que la culpabilidad pueda ser fundamento y medida de la pena”. (Congreso de la República, 2009, pág. 3)

Mientras que la teoría de la prevención general concibe a la pena como una amenaza que por medio de las leyes se dirige a toda la colectividad con el fin de limitar al peligro derivado de la delincuencia latente en su seno. Esta coacción formulada en abstracto se concretiza en la sentencia, cuando el juez refuerza la prevención general al condenar al autor debido a que por este acto está anunciando a los demás lo que les ocurrirá si realizan idéntica conducta (por eso, la lógica de este criterio exige que las penas sean cumplidas, de lo contrario, el fin intimidatorio se ve afectado).

Por tanto, desde un punto de vista puramente narrativo, estos conceptos no se centran en el impacto del castigo en el infractor, por lo que “prevención general” también significa evitar el delito afectando la generalidad. En síntesis, ambas teorías se consideran como amenazantes punitivas, porque su racionalidad se basa en su propósito de evitar acciones punibles contra potenciales autores.

3.1.3. Teoría mixta

Sobre la presente tesis, López Pérez (2012) señala: En la esfera de influencia de las teorías mixtas de la pena, el fundamento material del poder punitivo, estaría tanto en la necesidad de realización de la justicia a través de la aplicación de la pena, como también de la necesidad de prevención a través de la pena. A nuestro entender el fundamento material sería el de la necesidad de justicia y de prevención, a través de un instrumento legal y legítimo, como lo es la pena. (pág. 5)

3.2. La acreditación del hecho delictivo

Esta acción en el derecho penal representa un elemento importante en la línea del reconocimiento de la responsabilidad penal que le ha de corresponder a un determinado sujeto en función a la comisión de un acto delictivo, por lo mismo que interesa saber la manera en que se desempeña durante el proceso de la observación de estos actos ilícitos.

Así se tiene pues que la acreditación de esta responsabilidad se tiene que trabajar en base a indicios o pruebas, aunque Resulta discutible si un solo indicio puede conllevarnos a la acreditación de la responsabilidad penal de una persona o la existencia de un hecho delictuoso, en un grado de certeza. (Pisfil, 2014, pág. 144)

En lo que respecta al reconocimiento del hecho delictivo tiene trascendental importancia el aporte de certeza que puede otorgar el indicio como parte de la prueba que conllevará al reconocimiento de la responsabilidad del sujeto, así pues, se tiene que el nivel de importancia de la prueba lo otorga precisamente su vinculación con la acción ilícita. En tal sentido se concibe a la prueba “a) como el método orientado a comprobar los hechos, sea la herramienta procesal para acreditar los hechos, b) con respecto a los datos, elementos, evidencias o motivos, que siendo analizados en el momento procesal oportuno sirven para fundamentar la decisión y c) como resultado obtenido, es decir, lo que se tiene por probado”. (Zamora Acevedo, 2014, pág. 157)

En lo señalado se puede comprender que la manera más idónea para lograr la acreditación del hecho delictivo está relacionada con la acción de la prueba en

todos sus aspectos en tanto que se pretende generar convicción de parte de quien juzga la acción delictiva respecto a la responsabilidad del agente, lo cual resulta trascendental en los casos complejos como lo que pretende explicar la estructura probatoria en el derecho penal.

Sobre ello se debe tener en cuenta que se maneja el carácter probatorio en tanto que resulta aplicable el principio de que las partes probarán los hechos en que funden su pretensión o bien conforme a los cuales basen su resistencia a tal pretensión. Es decir, la parte acusadora debe acreditar los elementos constitutivos del particular tipo penal imputado al procesado y este a su vez tratará de demostrar las excluyentes de responsabilidad o bien atenuantes correspondientes. (Plascencia Villanueva, 1995)

Capítulo IV

Análisis de los resultados de la investigación

4.1. Análisis jurisdiccional

Tabla 1: Análisis de sentencias por el delito de agresiones contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar

N.º Expediente	Calificación jurídica del hecho punible	Decisión
1. 14405-2018-90-1706-JR-PE-06	Califica el vínculo contemplado en el tipo penal hasta “de parte de un integrante a otro del grupo familiar”, no califica la intención volitiva en razón de agresión “a una mujer por su condición de tal”	Condena al acusado como autor del delito, sanción: diez meses y nueve días de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de un año.
2. N.º 10100-2021-1706-JR-PE	No desarrolla la calificación del hecho punible, solo indica que corresponde a un supuesto subsumido en el segundo párrafo inciso 7 del artículo 122º-B del Código Penal.	Condena a un año y ocho meses y diecisiete días de pena privativa de libertad efectiva.

<p>3. 10065-2021-92-1706-JR-PE-07</p>	<p>No contempla la acción contra la mujer por su condición de tal, pero si describe la protección del bien jurídico integridad física y mental de la persona, especificando que, tratándose de violencia contra mujeres, tal violencia deberá producirse rompiendo el estereotipo de género, esto es que sea “contra la mujer por su condición de tal”. Pese a tal indicación descriptiva de la norma, no se indica en el contenido de la resolución ninguna acción evaluativa que determine esta característica de la acción.</p>	<p>Condena al acusado con una sanción de un año ocho meses diecisiete días de pena privativa de la libertad convertidas a ochenta y ocho jornadas de servicios comunitarios.</p>
---------------------------------------	--	--

4. N.º 5172-2021-93-1706-JR-PE-01	Solamente señala que se está ante el supuesto previsto en el artículo 122º-B primer y segundo párrafo numeral 4 del Código Penal.	Condena al acusado a un año nueve meses de pena privativa de libertad efectiva convertida a noventa jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
5. N.º 02383-2021-33-1706-JR-PE-08	Solamente señala que está ante el supuesto del primer párrafo del artículo 122-B sin causas de justificación.	Condena al acusado con una sanción de un año cinco meses y cuatro días de pena privativa de libertad efectiva convertida a setenta y cuatro jornadas de prestación de servicio comunitario.
6. N.º 2317-2021-78-1706-JR-PE-06	Realiza análisis de la culpabilidad relacionada con la admisión de los hechos acusados, mas no desarrolla la culpabilidad en función al tipo penal respecto a la intención de	Condena a cuatro años de pena privativa de libertad efectiva convertida en una pena de prestación de servicios a la comunidad de 180 jornadas de prestación al servicio comunitario.

	lesionar a la “mujer por condición de tal”.	
7. N.º 7351-2021-86-1706-JR-PE-07	No se describe, solo se traslada el sustento jurídico del fiscal respecto a la tipificación del artículo 122-B del Código Penal, no desarrolla verificación del carácter volitivo que vincula a “una mujer por su condición de tal”	Condena al acusado con una sanción de diez meses nueve días de pena privativa de la libertad de carácter efectiva, convertida a 44 jornadas de prestación de servicios a la comunidad e inhabilitación.
8. N.º 5583-2021-1706-JR-PE	Señala el tipo penal y la descripción del mismo indicando que es un delito de resultado que en su aspecto subjetivo es eminentemente doloso, al realizarse con conciencia y voluntad de desplegar la conducta ilícita; mas no desarrolla el concepto respecto a la conciencia y voluntad	Absuelve al acusado.

	respecto a la condición de agresión “a una mujer por su condición de tal”.	
9. N.º 11198-2018-1706-JR-PE	Señala el tipo penal y la descripción del mismo indicando que es un delito de resultado que en su aspecto subjetivo es eminentemente doloso, al realizarse con conciencia y voluntad de desplegar la conducta ilícita; mas no desarrolla el concepto respecto a la conciencia y voluntad respecto a la condición de agresión “a una mujer por su condición de tal”.	Absuelve a la acusada.
10. N.º 00002-2022-47-1706-JR-PE-05	Señala la presencia de elementos normativos del tipo penal “condición de tal” y “grupo familiar”, desarrolla luego doctrina sobre	Absuelve al acusado de la acusación penal.

	<p>violencia familiar y el carácter pluriofensivo del tipo penal destacando la protección de la integridad de la mujer por condiciones relacionadas con la violencia de género, mas no establece calificación de la conducta en razón de estas condiciones volitivas relacionadas con la violencia “contra la mujer por su condición de tal”.</p>	
--	---	--

Nota: Elaboración propia del investigador basado en la información proporcionada por el Poder Judicial de acuerdo a la gestión realizada ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, conforme los documentos anexos en esta investigación.

OBSERVACIÓN:

Como es de apreciar en el contexto de la aplicación de lo descrito en el contenido tipológico del numeral 122- B del ordenamiento jurídico punitivo del Perú, existe un criterio unificado para la calificación del hecho delictivo, el cual resulta ser el mismo aun cuando el resultado de la determinación sea distinto; esto

se indica en tanto se han verificado sentencias absolutorias, así como condenatorias. La condición principal para calificar el hecho delictivo a nivel jurisdiccional depende únicamente de la corroboración del resultado que se aprecia de la violencia generada sobre la mujer, lo cual no es suficiente para establecer un juicio que vaya más allá de la configuración de una lesión común.

Esto último se indica en tanto que al ser una cuestión común se aplica en un mismo sentido, vale decir que solamente se observa la existencia del acto lesivo y el resultado, pero el tipo penal resulta ser de una categoría más compleja, puesto que las condiciones normativas comprenden elementos que deben ser evaluados al momento de subsumir la acción. Lo que se pretende señalar es que según lo analizado la judicatura no plantea una evaluación de la condición volitiva del sujeto para establecer finalmente la condición normativa del tipo referida a la agresión en sí sobre una mujer, pero por su condición de tal; esto es que solo por el hecho de ser mujer, el agresor haya arremetido física o psicológicamente sobre ella.

Es sobre esta particularidad en la construcción que se genera la observación en esta tesis, puesto que la necesidad de reconocer una acción punitiva requerirá de poder advertir una característica en la conducta del sujeto activo, esta debe estar vinculada con la valoración previa de la condición de tal de la mujer, esto es que solo por el hecho de ser una mujer haya cometido la acción violenta. Esta conducta se presenta en la realidad jurídica bajo la perspectiva de la ideología de género que resulta ser equitativa a la protección de la mujer en sus derechos con el fin de establecer igual en el trato por el solo hecho de ser mujeres.

Conviene señalar que las acciones que se toman desde el punto de partida de la estrategia política que construye una norma, sigue teniendo gran influencia política y filosófica, eso es que la tendencia de las ideologías aplicadas en la normativa jurídica cala sobre el carácter subjetivo, en tanto que coloca para su calificación condiciones que intentan proteger la discriminación por este tipo de razones, esto es por género.

4.2. Resultados de la opinión de los operadores jurídicos

Tabla 2: El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar describe una acción violentista en contra de estos sujetos con la orientación de identidad de género.

Alternativas	Resultados
a. De acuerdo	37
b. En desacuerdo	10
c. No opina	03
Total	50

Ilustración 1: Gráfica porcentual de la afirmación El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar describe una acción violentista en contra de estos sujetos con la orientación de identidad de género

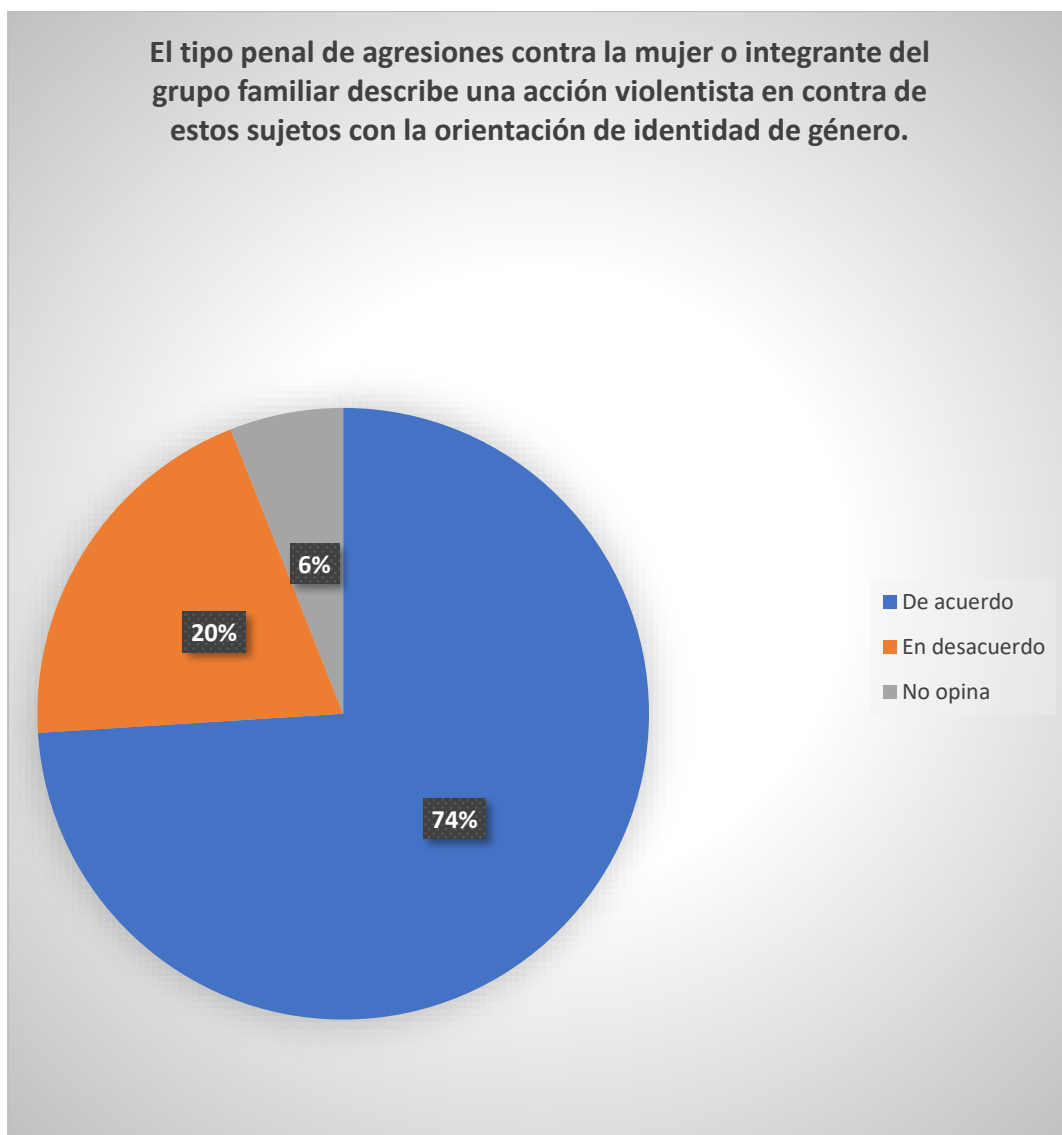


Tabla 3: La configuración del tipo penal de agresiones se describe como uno de carácter complejo, pero no condiciona al juzgador la evaluación bajo estas características en cuanto a la acreditación del hecho delictivo.

Alternativas	Resultados
a. De acuerdo	43
b. En desacuerdo	06
c. No opina	01
Total	50

Ilustración 2: gráfica porcentual de la afirmación: La configuración del tipo penal de agresiones se describe como uno de carácter complejo, pero no condiciona al juzgador la evaluación bajo estas características en cuanto a la acreditación del hecho delictivo.

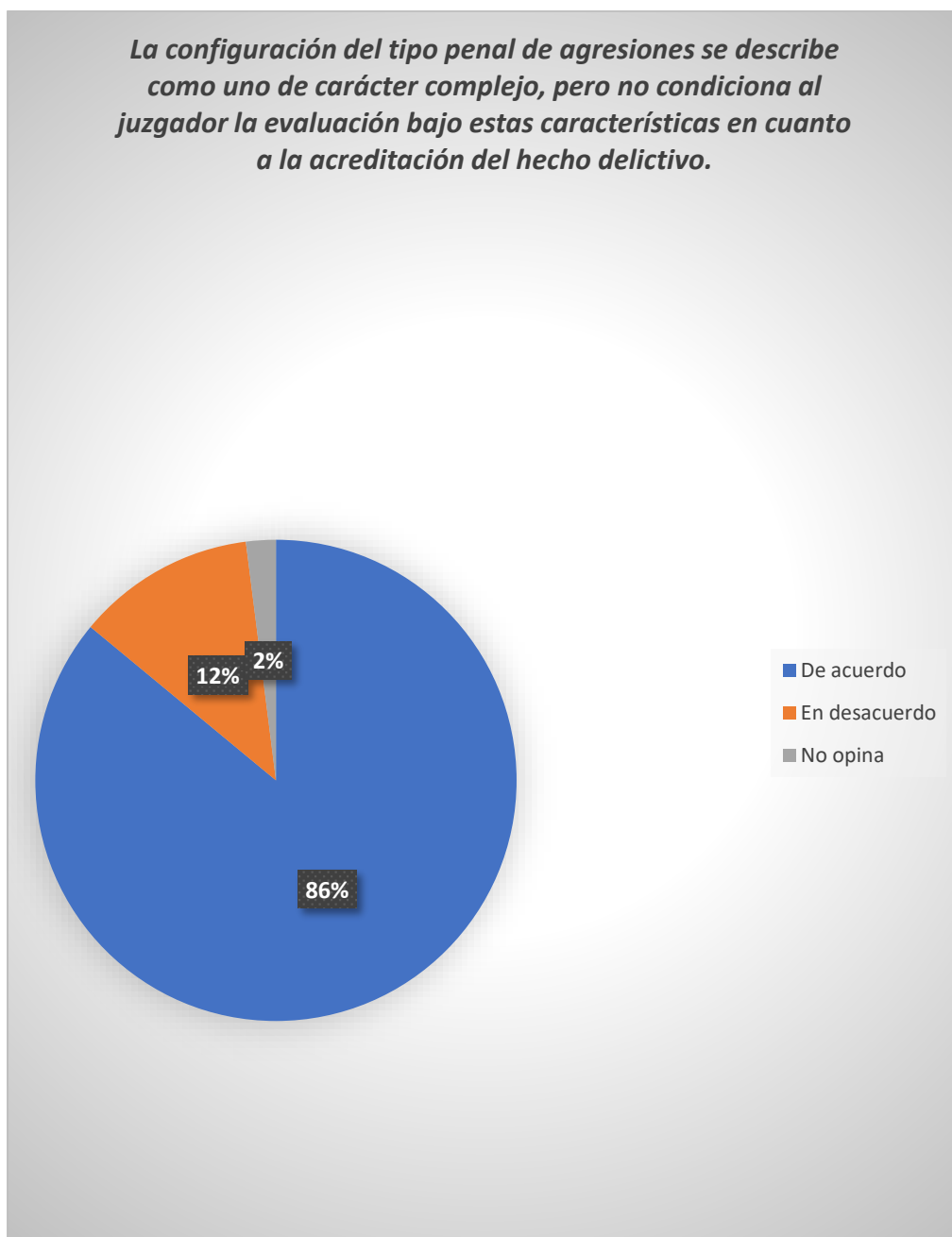


Tabla 4: Debe adecuarse la construcción del tipo penal de agresiones en el Código Penal a fin de establecer un parámetro que permita al juzgador asumir un criterio evaluador en función a la complejidad del tipo para reconocer el aspecto objetivo y subjetivo de la conducta.

Alternativas	Resultados
a. De acuerdo	44
b. En desacuerdo	06
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 3: gráfica porcentual de la afirmación: “Debe adecuarse la construcción del tipo penal de agresiones en el Código Penal a fin de establecer un parámetro que permita al juzgador asumir un criterio evaluador en función a la complejidad del tipo para reconocer el aspecto objetivo y subjetivo de la conducta.”



Tabla 5: El Ius Puniendi es una potestad que tiene el Estado para intervenir ante la existencia de actos que operan fuera de lo permitido de acuerdo al sistema jurídico a fin de imponer una sanción y conseguir la reeducación, resocialización y reinserción del delincuente a la sociedad.

Alternativas	Resultados
a. De acuerdo	48
b. En desacuerdo	02
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 4: Gráfica porcentual de la afirmación: El Ius Puniendi es una potestad que tiene el Estado para intervenir ante la existencia de actos que operan fuera de lo permitido de acuerdo al sistema jurídico a fin de imponer una sanción y conseguir la reeducación, resocialización y reinserción del delincuente a la sociedad

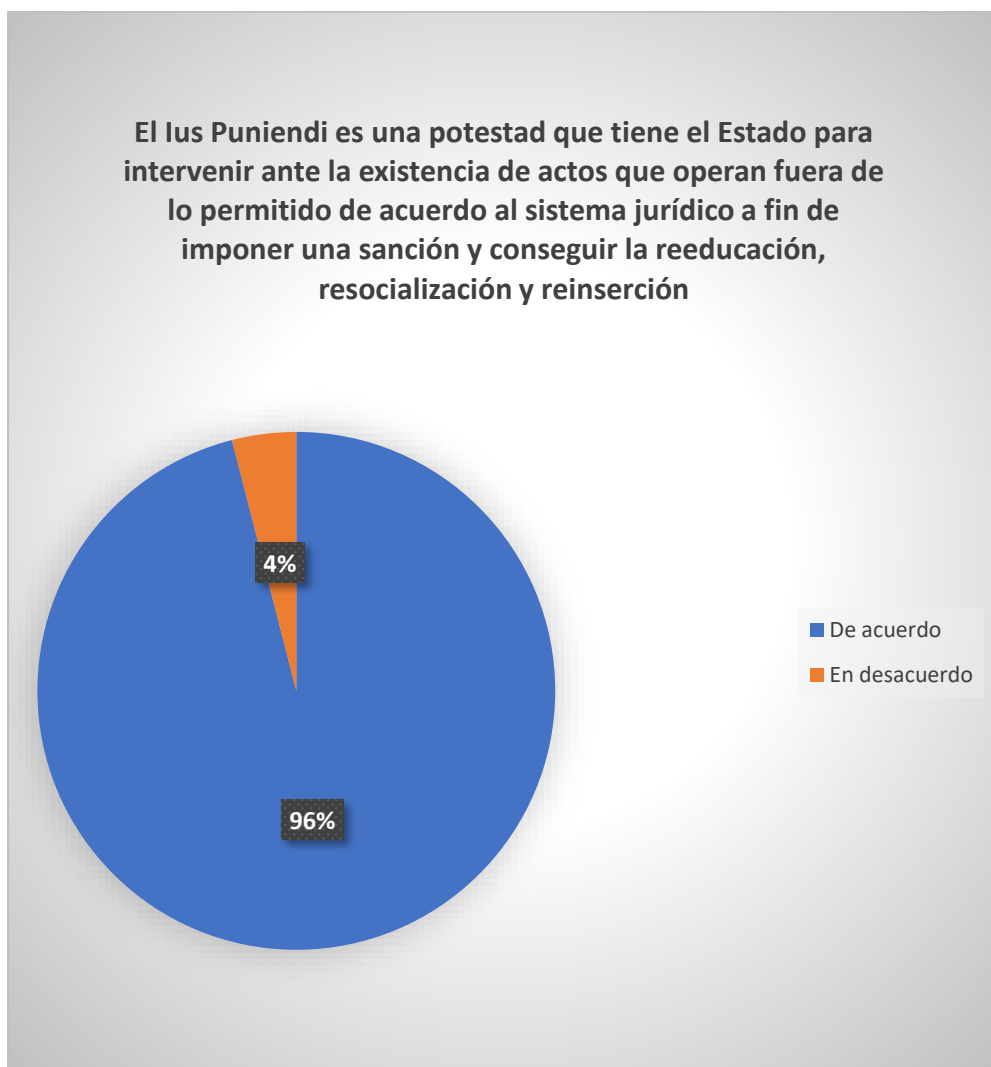


Tabla 6: La acción del Ius Puniendi requiere de la correcta identificación o acreditación del hecho delictivo a fin de imputar responsabilidad para poder sancionar, lo cual en el caso de los tipos penales complejos precisa de la evaluación objetiva y subjetiva de la acción, lo cual no se advierte en el tipo de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

Alternativas	Resultados
a. De acuerdo	40
b. En desacuerdo	08
c. No opina	02
Total	50

Ilustración 5: Gráfica porcentual de la afirmación: La acción del Ius Puniendi requiere de la correcta identificación o acreditación del hecho delictivo a fin de imputar responsabilidad para poder sancionar, lo cual en el caso de los tipos penales complejos precisa de la evaluación objetiva y subjetiva de la acción, lo cual no se advierte en el tipo de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

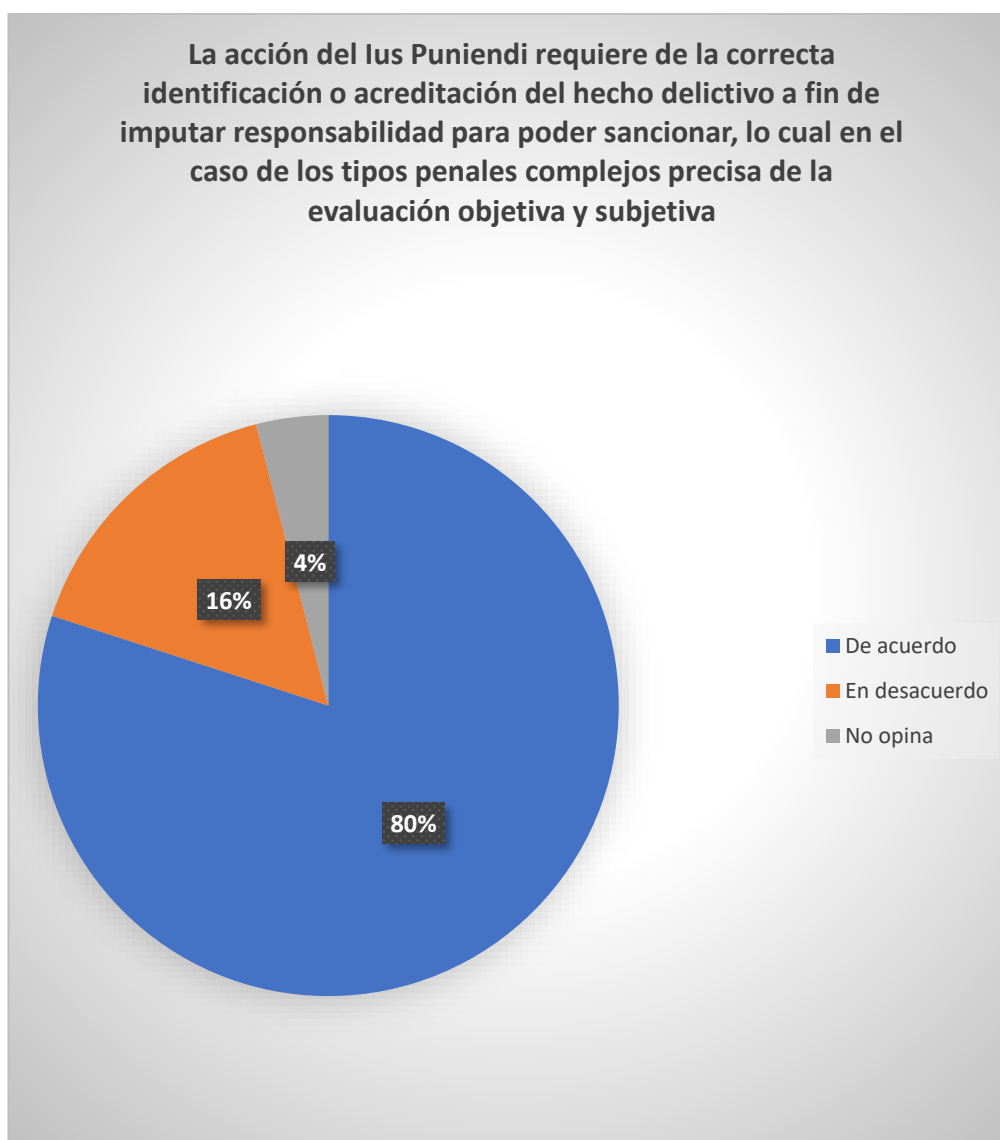
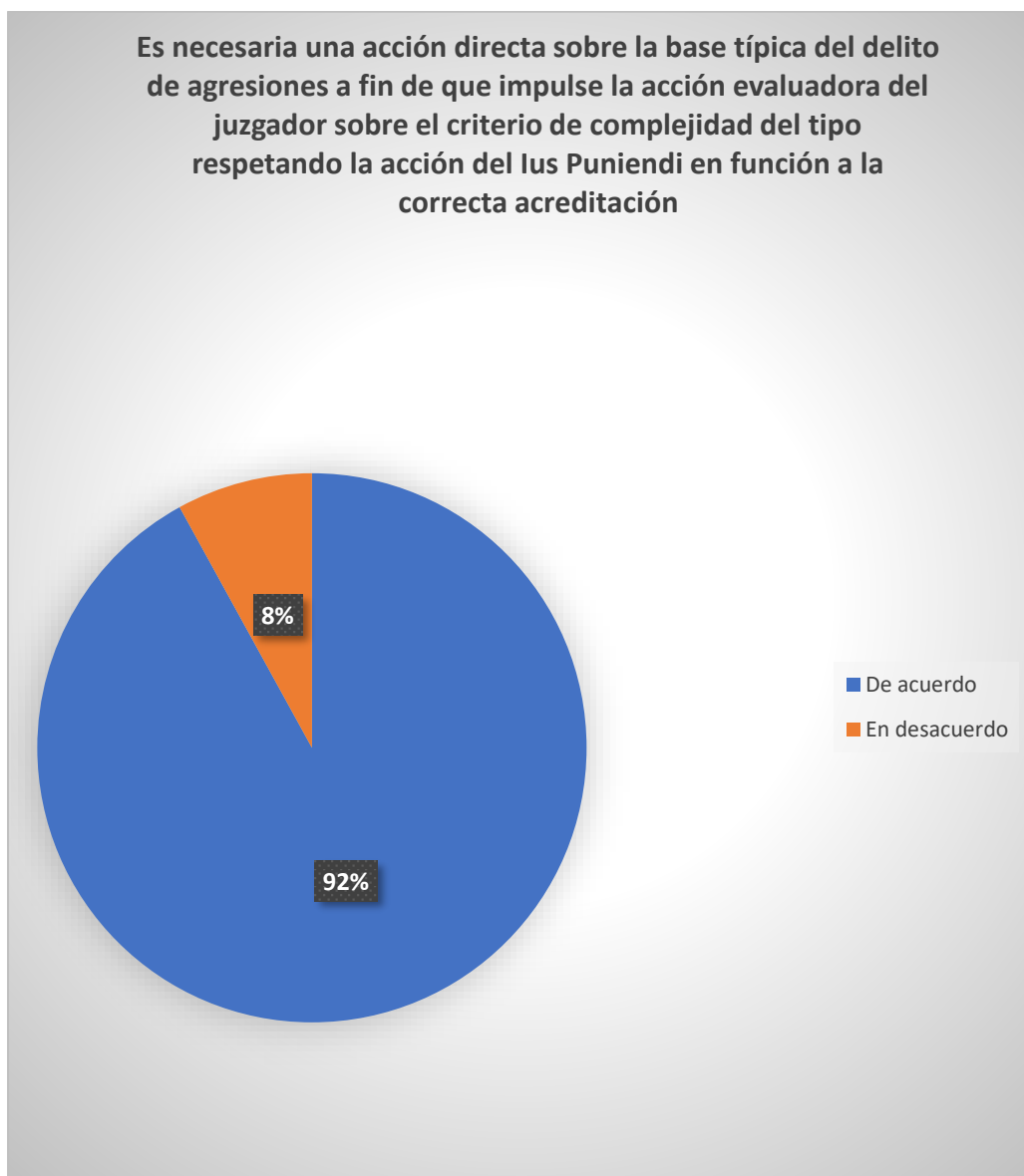


Tabla 7: Es necesaria una acción directa sobre la base típica del delito de agresiones a fin de que impulse la acción evaluadora del juzgador sobre el criterio de complejidad del tipo respetando la acción del Ius Puniendi en función a la correcta acreditación del hecho delictivo y la responsabilidad penal.

Alternativas	Resultados
a. De acuerdo	46
b. En desacuerdo	04
c. No opina	00
Total	50

Ilustración 6: Gráfica porcentual de la afirmación: Es necesaria una acción directa sobre la base típica del delito de agresiones a fin de que impulse la acción evaluadora del juzgador sobre el criterio de complejidad del tipo respetando la acción del lus Puniendi en función a la correcta acreditación del hecho delictivo y la responsabilidad penal.



Capítulo V

La contrastación de la hipótesis

Esta fase que conforma la investigación ha logrado construirse en función al diseño no experimental, por lo mismo que se centra en primer término sobre la discusión de cada una de las metas de la tesis, esto es sobre el contenido doctrinario y jurisdiccional que se ha recopilado, con el fin de establecer un criterio particular del investigador, la toma de postura que en su conjunto y síntesis con la cual logró crear el espacio que valida el concepto contenido en cada variable, dadas las circunstancias de apreciación crítica.

Tales elementos que se han obtenido como efecto en la validación ejecutada sobre cada variable, lo cual ha sido unificada finalmente en la postura última de la tesis, ello para señalar si en efecto existe una condición de complejidad descrito en la tipología que señala las agresiones como parte de la estructura legislativa punitiva, lo cual no se encuentra aplicado de manera correcta, dado que las circunstancias que describen la acción delictiva no muestran un aspecto determinante sobre la voluntad del agente, esto en tanto que se desprende del elemento normativo del tipo estudiado, el cual señala “en su condición de tal”. Dicha construcción determinativa ha permitido contrastar la hipótesis que se verifica corroborada en su contenido.

5.1. La discusión de los resultados de la investigación

5.1.1. Discusión sobre el objetivo específico: “Interpretar el tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar, a fin de reconocer su complejidad”

En función al contenido teórico que se incorporado de acuerdo al objetivo específico relacionado con el tipo penal de agresiones contra la mujer, se ha generado cierto grupo de interrogantes que se han de plantear y resolver a fin de poder asumir la postura del investigador, siendo la primera de ellas ¿cuáles son los límites de la potestad sancionadora del Estado?

De acuerdo al desarrollo de los trabajos previos contenidos en la investigación, se debe tener en cuenta lo señalado por Bautista Peña (2019) respecto a la condición en la cual se desarrolla el poder punitivo estatal referida a la necesaria presencia de límites, que son señalados desde dos perspectivas esto es, material y formal.

De las dos condiciones señaladas, se puede colegir como aquella de más utilidad para el enfoque de esta investigación, lo explicado respecto a los límites de carácter formal que son atribuidos a la potestad punitiva del Estado, en tanto que la construcción tipológica de las acciones delictivas, se constituyen como el punto de partida para la concepción del delito en sí, vale decir, que la estructura del tipo penal es determinante para su aplicación en el ámbito jurisdiccional, donde recién tendrá cabida el segundo límite contemplado como material.

En función a ello se reconoce la utilidad de esta pauta interpretativa de los tipos penales, en razón de los límites al poder punitivo, que se adhiere al carácter sistemático de la interpretación, dado que el origen de las limitaciones del poder estatal se encuentran contemplados en la normativa constitucional, así pues, esta perspectiva servirá para la verificación del contenido del tipo penal de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, permitiendo con ello la verificación del nivel de complejidad que alcanza.

Como primer engranaje como parte de sistematización jurídica que debe alcanzar la descripción típica contemplado a través del tipo descrito sobre agresiones como parte de un ordenamiento jurídico punitivo, será entendido como regla limitante creada para que el Derecho Penal reduzca su intervención al último nivel de la acción jurídica que establecen las reglas que permitan establecer un adecuado equilibrio de la sociedad bajo el correcto control estatal. Esto implica existencia de sanciones proyectadas sobre las acciones delictivas, deben ser el último recurso contemplado en la estrategia pública que para este caso concierne en un primer momento prevenir las situaciones conflictivas sociales y luego acudir a las sanciones que se puedan establecer en función al nivel de lesividad que afectan las garantías constitucionales.

¿cuáles son los factores que originan el conflicto social que se sanciona con el artículo 122-B del Código Penal?

Según el aporte de la investigación desarrollada por García Loayza (2018), existe un origen determinante de la existencia de los conflictos sociales como el que interesa a esta investigación, ello con especial atención a la discrepancia de corte

familiar que promueve la presencia de actos lesivos entre los integrantes de este grupo. Agrega en base a ello que la existencia de estos factores no se ha tenido en cuenta al momento de crear el tipo penal que describe dicha realidad para luego establecer una sanción.

Como ya se había señalado en el anterior análisis, para la intervención del poder punitivo del Estado, existen límites necesarios, tal es el caso de lo señalado por este trabajo previo, puesto que señala la existencia de elementos que la organización estatal no ha considerado previamente al establecimiento de tal figura ilícita dentro del esquema punitivo. Esta indicación conlleva a un razonamiento directo que justifica la anulación o eliminación del tipo penal, en tanto que estaría superando el primer límite de control de la potestad sancionadora del Estado.

Tal inferencia no debe desarrollarse bajo esta condición absoluta, esto es que la presencia de contradicciones frente a la estructura ideal del ordenamiento jurídico no anula la existencia de los tipos penales, más bien, sugieren la posibilidad de una adecuación idónea a la realidad que se manifiesta en el ámbito previo al derecho, esto es en las condiciones fácticas que se deben apreciar en la interrelación del grupo familiar, para que las políticas públicas reorienten sus estrategias de acción.

Es importante considerar como base del análisis de la realidad que circunda a este tipo penal, los factores que el trabajo previo analizado menciona como principales; estos son, el factor socioeconómico que debe contemplarse en función a las condiciones que se manifiestan en el hogar, puesto que, en este ámbito se presentan los conflictos y se presume el Derecho Penal interviene con el afán de

controlarlo; luego, se ha de tener en cuenta el factor psicológico, que resulta trascendental para el análisis de la realidad que atraviesa cada caso en particular, atendiendo a las condiciones individuales de cada sujeto y sus alcances en la interrelación del grupo familiar; por último el factor cultural, que tal vez sea uno de los más importantes, dado que la adopción de una idiosincrasia contaminada con información que no necesariamente es la adecuada, o tal vez no se orienta de manera idónea para la comprensión de la sociedad sobre todo en los niveles más bajos, que al combinarse con la comprensión sobre la manera en que se organiza la sociedad en función a las costumbres heredadas y adquiridas, terminan por detonar el conflicto en el grupo familiar.

¿Cuán adecuada resulta la tipificación del delito de agresiones en el ámbito jurisdiccional?

Tal cual se puede apreciar del estudio desarrollado por los investigadores Garrido, Postillo y Tarazona (2018), en la realidad jurisdiccional se instauran un gran número de procesos destinados a esclarecer la realidad o responsabilidad existente frente a la acción violenta ejercida en contra de mujeres, así como también en caso de miembros que componen a la familia como grupo, a los que califica como innecesarios en tanto que la tipificación que los origina resulta de un carácter desproporcional y carente de razonabilidad.

Tal vez la intención de estos investigadores sería la de mostrar un panorama jurisdiccional que no justifica la acción del sistema de justicia para solucionar conflictos que finalmente no existen, en tanto que terminan siendo archivados por factores diversos en tanto que no es posible demostrar primero la existencia de la

lesión y segundo la responsabilidad del agente. Este aporte es importante, en tanto que permite elucubrar un enlace que une a dichas condiciones con la construcción misma del tipo penal en tanto que no distingue de los niveles lesivos sobre los que interviene el derecho penal.

Estos niveles de lesividad, se comportan como uno de los límites antes mencionados, que sirven de pauta para la intervención del derecho penal, así pues el reconocimiento de la lesión dependerá de lo que distingue entre una falta por lesiones mínimas o un delito que se reconoce por el nivel más grave de la lesión, esta separación, no se advierte en la estructura del tipo penal del artículo 122-B, dado que el reconocimiento médico legal de la lesión no admite la existencia de niveles bajos de lesión, puesto que resulta posible computarlos desde el primer nivel como una agresión, esto es como un delito pasible de sanción.

Desde luego esta característica, conlleva a la inadecuada tipificación de la acción delictiva, en tanto que al no existir un filtro previo que determine si la acción del aparato judicial justifica la atención del caso en particular, dado que todas las denuncias son admitidas e investigadas. Esta realidad muestra características coincidentes, en lo que se refiere al término del proceso, puesto que el más alto porcentaje de casos está representado por los archivos.

Toda esta descripción, sirve como base para el análisis interpretativo del tipo penal de agresiones contra la mujer y el grupo familiar, a fin de reconocer los factores que estarían ausentes en su construcción, sobre todo en lo que corresponde a los elementos descriptivos del tipo, a fin de establecer dichas carencias como el

punto de partida de la sugerencia de cambios que permitan establecer un planteamiento adecuado que le corresponde a su complejidad, con lo cual se espera mejorar las condiciones de su efectividad.

¿Qué tan efectivos son los límites para la aplicación proporcional de las penas en el ámbito de las agresiones contra la mujer y el grupo familiar?

Al contemplar la investigación de Orozco López (2020), se aprecia la crítica al límite establecido respecto a la aplicación de la pena suspendida en los casos de violencia familiar, lo cual guarda estrecha relación con la tesis ahora desarrollada, en tanto que el delito de agresiones forma parte de este grupo de acciones estratégicas que adopta el Estado para combatir el crimen en el ámbito familiar. Resulta de particular interés el hecho de que la figura de la pena suspendida deba restringirse en su aplicación, sobre todo desde la perspectiva de la proporcionalidad de las penas.

Esta condición proporcional que debe vincular a las sanciones y el nivel de lesividad de la acción delictiva se mide en razón de la existencia del límite a la intervención del derecho penal que se plasma en la figura de la pena suspendida, vale decir, que se comporta como indicador del nivel lesivo, dado que al ser superada dicha cuantificación, 4 años, la sanción será ejecutada de manera efectiva. Esto implica razonar sobre la presencia de elementos condicionantes que permitan actuar al Derecho Penal, como una suerte de control en los niveles más bajos de la lesividad, con el fin de propiciar un tipo de prevención, tal cual lo señala la doctrina, bajo el carácter de residual.

Bajo esta prerrogativa, se advierte la presencia de otras acciones de parte del sistema de justicia, en tanto que no se limitan de manera concreta los derechos del sentenciado, sino se establecen pautas de conducta que deberán ser cumplidas a condición de ser revocada la medida. Tal límite no se observa como efectivo en el campo de la sanción por el delito de agresiones, tal es así que se ha limitado el efecto de la pena suspendida, lo que conlleva a indicar que el nivel de la sanción que se entiende como de mínima afectación al imputado, carece de razonabilidad, en tanto que se propicia su ejecución directa.

Las condiciones del sistema penitenciario no se adaptan a esta limitación que opera sobre la pena por casos de agresiones, debido al hacinamiento de estos centros carcelarios, lo que conlleva a razonar sobre la idea de un efecto incongruente que genera más de un problema sin apenas dar solución adecuada al origen del conflicto en el seno familiar.

¿Qué tan idónea es la participación del derecho penal para disminuir los índices de agresiones contemplados en el artículo 122-B del Código Penal?

El carácter que se advierte respecto a la intervención del derecho penal para solucionar el nivel de agresiones en la familia es inidóneo, según lo señalado por Quispe Ruiz (2019), dado que la base que justifica la necesidad de sancionar por este tipo de conductas se orienta por la criminalización de la familia. Este primer aspecto contempla la necesidad de trasladar un problema que se concibe en el seno privado de la familia, hacia el ámbito público que corresponde al derecho penal, con la intención de solventar el conflicto mediante la intervención del ius puniendi del Estado.

Tal condición supera ampliamente los niveles de efectividad que se supone justifican la participación de la potestad punitiva, en tanto que esta última solo tiene como función aplicar una pena ante la presencia de un delito a fin de salvaguardar las garantías que se contemplan en el ordenamiento constitucional. Si bien es cierto que la familia al ser la célula básica de la sociedad requiere de protección eficiente; esta característica precisa más que de la intervención directa mediante una sanción, de la construcción de estrategias que solucionen el problema en la base de origen del mismo, esto es a nivel social, para que luego de la lucha por conseguir este fin, ante los efectos insatisfactorios, recién deba intervenir el derecho penal.

Además, de este factor de la criminalización de la familia, se describe un efecto negativo respecto a la tendencia de la política penal para tratar de coaccionar al delincuente mediante el incremento de las sanciones, en tanto que ello no logra solucionar la problemática, desde luego labor preventiva que no le corresponde al ciento por ciento al derecho penal. Pese a ello, se percibe en la realidad el constante crecimiento de las cifras que muestran la presencia de agresiones en contra de la mujer y los miembros del grupo familiar.

Todo ello, permite reconocer otro factor de incompatibilidad que se asienta sobre la construcción punitiva vinculada con la agresión ejercida en contra de las mujeres, con respecto de la realidad social experimentada en el Perú, así pues las situaciones de agresión no solo se han tomado a la ligera, dada la abundante cantidad de denuncias que terminan siendo archivadas; sino que, los efectos que tiene el tipo penal sobre la tipificación a nivel jurisdiccional se aprecia como

ineficiente, elemento que podría estar propiciando la ausencia de control que se espera de parte del derecho penal.

TOMA DE POSTURA:

De la discusión del objetivo específico: Interpretar el tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar a fin de reconocer su complejidad, se tiene que, el artículo 122-B del código penal -agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar- es un tipo penal complejo, puesto que como ya se ha explicado, se ha identificado un factor ausente en su construcción, esto es, en el elemento descriptivo del tipo, problema relacionado a la especificación respecto a la conducta que describe, lo que genera la ineficacia para alcanzar el reconocimiento adecuado de la responsabilidad penal y la posterior sanción. Precisamente esta ausencia genera que la mayoría de los casos se archiven a nivel fiscal generando inseguridad en la población (la mujer así como algún integrante o miembro de la familia, víctimas de agresiones).

Además, el legislador al crear el tipo penal no ha tomado en cuenta la realidad de la familia peruana, tanto en el factor socioeconómico, psicológico y cultural; en ese sentido, se pretende sugerir a través de políticas públicas la posibilidad de reorientar estrategias a fin de proteger a la mujer y al grupo familiar.

5.1.2. Discusión del objetivo específico: “Estudiar la teoría del ius puniendi para reconocer los elementos que permiten la acreditación del hecho delictivo”

La estructura del ordenamiento jurídico permite la intervención del Estado a través de medios de coerción para lograr el control esperado en función a la vigencia del esquema normativo, para lo cual se incorporan herramientas de acción que se justifican precisamente en la necesidad de proteger dicho ordenamiento jurídico. Esto conlleva a la creación de un espacio de coerción con el fin de proyectar en la sociedad una imagen de poder que permite la aplicación de sanciones en tanto se haya reconocido la responsabilidad de cierto sujeto de derecho, es precisamente para estos fines que se precisa de la acreditación de hechos, esto es el conocimiento de la verdad.

Como tal se ha indicado, esta búsqueda de la verdad depende de la forma en que participa la prueba en la tarea de reconocer la forma en que se producen los hechos con la intención de poder trasladarlos hacia el enfoque de lo ilícito que contempla el ordenamiento jurídico penal. Es así que resulta necesario cuestionar sobre esta necesidad de conocimiento de la verdad si ¿La intervención del ius puniendi resulta eficaz para sancionar el delito de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar?

En este tipo de ilícito penal construido en base a la presión social que clama por un clima de seguridad jurídica ante la presencia de ciertos indicadores que muestran una realidad lesiva en contra de las mujeres que bajo su posición débil son amenazadas y atacadas por su propia condición de tal. Este razonamiento se basa en una orientación de pensamiento destinado a satisfacer la ideología de género que se va instalando cada día con más arraigo en el razonamiento de la sociedad.

Siendo así, resulta necesario saber si esta intervención punitiva que le corresponde a la organización estatal mediante su sistema de justicia implica un nivel de eficacia para lograr este tipo de reproche, el mismo que se presume proyectará un escarmiento social para así evitar este tipo de actos lesivos. Pues esta situación no resulta del todo satisfactoria, en tanto que la participación probatoria en este tipo de procesos, que se destine para el conocimiento de la verdad respecto a los elementos descriptivos del tipo, no alcanza a determinar el objeto esencial del tipo penal.

La condición de eficacia, sin duda va a estar medida en razón de los efectos positivos que alcanza en este caso la intervención punitiva estatal, es así que los indicadores que muestran un resultado de insuficiencia probatoria en el desarrollo de la investigación conllevan a dos situaciones bastante recurrentes, al establecimiento de medidas de protección como prevención hasta que se dilucide con exactitud la responsabilidad del sujeto o simplemente el archivamiento del caso.

En cualquiera de los dos casos se aprecia el nivel de ineficacia de la intervención en tanto que no se alcanza un nivel probatorio idóneo, esto es que lo que se averigua como verdad en el desarrollo de la investigación no se vincula con el sentido de agresión de la mujer con solo el hecho de ser mujer. Para entender este aspecto conviene señalar que la lesión que se produce sobre la mujer no solo tendría que medirse por la cuestión lesiva física o psicológica que se infringe sobre la víctima, sino que además se requiere de la verificación de la intención del sujeto

activo, dolo que incorpora un sentido subjetivo basado en el odio sobre la mujer solo por el hecho de serlo.

Como se ha descrito, el problema que atrasa la eficacia de la intervención punitiva del Estado radica en la propia construcción de los tipos penales y en su interpretación al momento de aplicarlos, por lo mismo que ante la pregunta de si ¿Es necesario modificar el esquema penal a fin de que permita al poder estatal establecer el orden social esperado? Cabe indicar que la forma en que se ha diseñado el análisis de los hechos para lograr arribar a una determinación de responsabilidad tiene un adecuado esquema, puesto que se orienta a la búsqueda de la verdad, entendida esta como la base de la acción punitiva. Tal elemento de convicción será lo que permita establecer un rango de sanción en tanto sea necesario claro está.

Es precisamente por esta condición o característica que presenta la aplicación de este tipo penal en la realidad de la violencia familiar, que se puede indicar sobre este delito que no aplica la teoría de la retribución, puesto que asumido bajo la concepción de intención dañosa que inspira el delito de agresiones contra las mujeres o los miembros que integran este grupo familiar como base de la sociedad, no se logra acreditar la responsabilidad según su elemento descriptivo y ello da como resultado ausencia de punición.

En función a la estructura punitiva que se maneja en el país se advierte la existencia de un sentido de prevención, pero de tipo especial que no se produce de manera directa, por lo mismo que es preciso saber si ¿Realmente la teoría de la prevención especial evita la reincidencia del sujeto activo en el delito de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar? Según lo que se ha podido verificar

en la realidad observada, la aplicación de este tipo penal convierte a la acción estatal en una verificación del ilícito en razón de los efectos lesivos, que encaja en cualquier tipo penal, pero no en la condición específica del odio contra la mujer. Esta característica conlleva a que se trate de una intervención ex post, puesto que no se advierte la posibilidad de que el tipo penal pueda establecer un efecto previo que evite la reincidencia, lo cual se aprecia por las constantes denuncias en un solo grupo familiar.

De manera concreta se puede establecer que el carácter punitivo del Estado se convierte en cualquiera de sus perspectivas retributivas, preventivas o mixtas, una acción de tipo amenazante respecto de la acción que se califica como lesiva de la condición de mujer o de integrante familiar. Esta convicción particular de la situación de los agentes delictivos no alcanza para solucionar el problema de fondo que se inclina más hacia una situación que deviene de la propia relación o vínculo familiar, social y hasta económico. Esta condición está lejos de poder otorgar una opción para que se produzca adecuadamente la acreditación de responsabilidad penal del sujeto activo, ello en función a los parámetros asumidos conceptualmente por agresiones a la mujer por su condición de tal y los miembros del grupo familiar.

TOMA DE POSTURA:

De acuerdo con el objetivo planteado: Estudiar la teoría del ius puniendi para reconocer los elementos que permiten la acreditación del hecho delictivo, es posible señalar que en función a la teoría punitiva la cual se constituye como atributo de la organización controladora estatal, no se justifica de manera completa el hecho de haber creado un tipo especial para la sanción por acciones cometidas en

el seno familiar, puesto que la acreditación del hecho delictivo no se concreta en la propia aplicación del tipo penal. Esto significa que según lo que se describe en el contenido tipológico que tiene una característica de complejidad, no resultaría posible el análisis de la condición subjetiva del sujeto activo, cuestión que resulta ser la única diferenciación con el ámbito de la lesiones o agresiones físicas, para generar daño sobre la mujer por el simple hecho de serlo. Esto es que se tendría que explicar o determinar para la acreditación del hecho delictivo, que existen tendencias o actitudes de odio hacia la mujer o por el hecho de ser mujer, no solo habría de bastar la ejecución de los actos violentos.

5.1.3. Discusión sobre el objetivo específico: “Analizar el nivel de intervención del ius puniendi por la acreditación del hecho delictivo respecto a las agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar en la Fiscalía Especializada en estos delitos de José Leonardo Ortiz entre los años 2019 y 2021”

Esta discusión se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis de casos seleccionados dentro de la actividad jurisdiccional del módulo de justicia a los cuales se ha podido acceder gracias al aporte de la Presidencia del Poder Judicial, en cuyas sentencias proporcionadas se puede advertir tanto la calificación de la acción delictiva de parte del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en delitos de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar durante los años 2019 al 2021.

Esta evaluación ha tenido como resultado la advertencia de una condición especial respecto a la forma de tipificar la acción delictiva, puesto que se logra subsumir al tipo en tanto las condiciones de resultado que opera sobre la violencia,

vale decir que la unidad de medida será lo indicado respecto a la violencia, mas no se tiene en cuenta su elemento normativo de complejidad, esto es que la conducta se haya desarrollado bajo el impulso de agredir a la mujer por el simple hecho de serlo, dado que se indica en la construcción del tipo “por su condición de tal”.

Esta prerrogativa jurídica, conlleva a la evaluación de un elemento volitivo en la conducta del sujeto activo, lo cual no se aprecia de la acción jurisdiccional, dado que solamente se enfocan en el resultado lesivo, para lo cual bien puede usarse figuras preexistentes en el ordenamiento jurídico. Vale decir que la justificación para la existencia de este tipo penal solamente se basa en la complejidad del mismo detallada por la condición volitiva, el accionar por una condición de género, sin duda alguna que se trata de una inclusión impulsada por la ideología de género con la intención de lograr mayor protección de las mujeres ante una posible agresión desmedida.

Es importante dejar en claro que la creación de tipos penales debería enfocarse en razón de la verdadera necesidad, un requerimiento demostrado no solo en cifras estadísticas, sino también en la evaluación de la realidad jurídica, la presencia tal vez de otras calificaciones delictivas prudentes y suficientes en el ordenamiento jurídico para satisfacer la punición o aquella función de intervenir que posee la estructura jurídica penal con base en la potestad punitiva para que la organización estatal a través del sistema de justicia sancione este tipo de conductas.

No se aprecia entonces, la necesidad de establecer un tipo penal específico con atención a condiciones de género si es que no se va a completar la calificación

del acto delictivo de una manera completa, vale decir que resulta incompleta la evaluación de la judicatura sobre este tipo de delitos, puesto que no se evalúa la condición punitiva del criterio de odio hacia la mujer. Esta acción jurisdiccional tal cual se aprecia, es posible que dejándola seguir su curso podría resultar en positiva pues permite calificar una acción particular en un ámbito específico como es el entorno familiar, pero esto último tendría que estar apañado por el resultado de la intervención punitiva reflejado en los niveles de violencia familiar, lo cual no se condice con un espacio de efectividad, más bien la carga procesal por este tipo de temas, crece cada día más, haciendo falta mayores elementos jurisdiccionales para la cobertura adecuada del sistema de justicia.

TOMA DE POSTURA:

Según lo desarrollado en esta discusión sobre el objetivo específico: Analizar el nivel de intervención del ius puniendi por la acreditación del hecho delictivo respecto a las agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar en la Fiscalía Especializada en estos delitos de José Leonardo Ortiz entre los años 2019 y 2021, es posible señalar que se aprecia en la realidad jurisdiccional la participación de la potestad sancionadora estatal mediante el ius puniendi, pero que no resulta del todo efectiva lo cual se debe a una insuficiente acreditación del hecho delictivo en el tipo penal estudiado.

La insuficiente acreditación del hecho delictivo a la que se hace referencia se debe a que la evaluación de los magistrados únicamente se enfoca en la determinación de la existencia de un efecto lesivo producido sobre la víctima como una cuestión de resultado del delito y luego la vinculación con el sujeto activo, que

en la mayoría de los casos termina siendo admitida; pese a ello no se concreta en ninguno de los casos analizados la existencia de conducta dirigida de manera intencional bajo el criterio de odio sobre la mujer por su condición de tal.

5.1.4. Discusión sobre el objetivo específico: “Proponer el acondicionamiento de especificaciones técnicas que permitan el reconocimiento de la acción delictiva, a fin de acreditar la responsabilidad del agente de una manera más eficiente”

De acuerdo a los aspectos que se han determinado en esta investigación respecto a la tipología penal de las agresiones contemplado taxativamente dentro del 122-B como artículo que define el contenido y sanción, prestando especial atención a la complejidad en la construcción típica; es preciso indicar la necesidad de advertir condiciones de inconsistencia en la determinación punitiva, vale decir en la acreditación de la acción criminal. Esto se indica en tanto que la acción punitiva del Estado resulta incompleta dado que no se acredita correctamente la acción delictiva, esto desde luego de acuerdo con su construcción misma.

Esta construcción para el tipo penal advierte una condición particular respecto a las agresiones que se produzcan sobre la mujer, esto es el hecho de que se hagan por “su condición de tal”, por lo mismo que para lograr la acreditación de la responsabilidad sobre la acción lesiva requerirá de la evaluación de este elemento normativo, el cual debe ser concretado de todas maneras para establecer el vínculo entre la acción y el agente. Significa que para tal fin deberán hacerse juicios sobre esta conducta que permitan establecer si es que se produjo con tal intención de lesionar a la mujer por el simple hecho de serlo.

De acuerdo a las condiciones en las que se presentan este tipo de acciones solo podría hacerse mediante una evaluación psicológica del agente, la misma que tendría que arrojar como resultado una desviación cognitiva hacia el odio contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres; o que en último caso sea el mismo agresor el que acepte esta condición volitiva, vale decir que acepte el sentimiento de odio por las mujeres. Esto último tiene un resultado que puede ser también perjudicial para los fines que se supone tiene el tipo estudiado, puesto que, si el imputado acepta este tipo de condición mental desviada hacia el odio de las mujeres por su condición de tal, la aceptación o la comprobación de esta cualidad mental por un especialista profesional, haría que se convierta en un sujeto incapaz para afrontar la responsabilidad, esto es un inimputable por alteraciones mentales.

Como se puede apreciar el resultado sería perjudicial para las intenciones punitivas del Estado, pero tal cual la construcción del tipo penal no cabe otra salida, puesto que si se precisa de una correcta calificación de la acción delictiva, tendría que realizarse este tipo de evaluación, por lo mismo que se sugiere la intervención de un especialista profesional de la psicología para que establezca si el imputado reúne la condición de agresor de mujeres por su condición de tal, elemento que debe tener un peso probatorio trascendente si el cual no podría establecerse la acción del ius puniendi al no estar completa la acreditación delictiva.

TOMA DE POSTURA

Según lo planteado en esta discusión es importante señalar que de acuerdo al objetivo específico: Proponer el acondicionamiento de especificaciones técnicas

que permitan el reconocimiento de la acción delictiva a fin de acreditar la responsabilidad del agente de una manera más eficiente, sobre el particular, deben incorporarse cambios tanto a nivel normativo, así como a nivel jurisdiccional, esto es en razón de los criterios adoptados por los magistrados para la calificación delictiva. Por lo mismo que resultará de utilidad incorporar sobre el contenido de la tipología que describe el ilícito, la necesidad para esta acción violentista que lesiona a las mujeres solo por la única razón de formar parte del género femenino, debe ser acreditada por el profesional especialista a fin de completar la evaluación de un tipo penal complejo como el de agresiones contemplado en el artículo 122-B del ordenamiento jurídico penal. Además, se debe recomendar la asunción de criterios específicos destinados a la correcta evaluación de la conducta de agresión que conjugada al resultado lesivo pueda establecer una correcta punición de la conducta.

5.2. Validación de las variables

5.2.1. Sobre la variable independiente: “La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar”

Es necesario explicar que la intervención de esta variable independiente en la construcción del planteamiento de esta investigación ha sido trascendente, en tanto que se constituye como el concepto que explica el origen del problema advertido en el ámbito jurisdiccional al aplicar el contenido que describe el ilícito de agresión en contra de las mujeres establecido según artículo 122- B del ordenamiento jurídico, lo que conviene analizar desde la perspectiva teórica en primer lugar.

Es así que, la construcción típica del artículo 122-B del código penal - agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar- es un tipo penal complejo, puesto que como ya se ha explicado, se ha identificado un factor ausente en su construcción, esto es, en el elemento descriptivo del tipo, problema relacionado a la especificación respecto a la conducta que describe, lo que genera la ineficacia para alcanzar la observación adecuado sobre su condición de responsable, lo cual deberá considerarse como base de la pena aplicada luego. Precisamente tal ausencia genera que la mayoría de los casos se archiven a nivel fiscal generando inseguridad en la población (lesión sobre la mujer así como de algún integrante de la familia, víctimas de agresiones).

Además, el legislador al crear el tipo penal no ha tomado en cuenta la realidad de la familia peruana, tanto en el factor socioeconómico, psicológico y cultural; en ese sentido, se pretende sugerir a través de políticas públicas la posibilidad de reorientar estrategias a fin de proteger a la mujer y al grupo familiar. Por lo tanto, se puede indicar como validación de esta variable independiente la siguiente afirmación:

La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar se advierte de la presencia del elemento normativo “por su condición de tal”

5.2.2. Sobre la variable dependiente: “La intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo”

Cabe señalar que la función de esta variable dependiente se orienta al reconocimiento conceptual del elemento sobre el cual se produce el efecto, que para este análisis será el ius puniendi a través de la acreditación del hecho delictivo, es

así que en función a la teoría punitiva entendida como atributo de la organización estatal a través del sistema de justicia, no se justifica de manera completa el hecho de haber creado un tipo especial para la sanción por acciones cometidas en el seno familiar, puesto que la acreditación del hecho delictivo no se concreta en la propia aplicación del tipo penal. Esto significa que según la descripción típica que contiene la tipología existe una característica de complejidad, no resultaría posible el análisis de la condición subjetiva del sujeto activo, cuestión que resulta ser la única diferenciación con el ámbito de la lesiones o agresiones físicas, para generar daño sobre la mujer por el simple hecho de serlo. Esto es que se tendría que explicar o determinar para la acreditación del hecho delictivo, que existen tendencias o actitudes de odio hacia la mujer o por el hecho de ser mujer, no solo habría de bastar la ejecución de los actos violentos.

Además de lo señalado, se aprecia en la realidad jurisdiccional la participación controladora de la organización estatal a través de la potestad punitiva que le asiste, pero que no resulta efectiva lo cual se debe a una insuficiente acreditación del hecho delictivo en el tipo penal estudiado. La insuficiente acreditación del hecho delictivo a la que se hace referencia se debe a que la evaluación de los magistrados únicamente se enfoca en la determinación de la existencia de un efecto lesivo producido sobre la víctima como una cuestión de resultado del delito y luego la vinculación con el sujeto activo, que en la mayoría de los casos termina siendo admitida; pese a ello no se concreta en ninguno de los casos analizados la existencia de conducta dirigida de manera intencional bajo el criterio de odio sobre la mujer por su condición de tal.

Se advierte por todo ello la necesidad de aplicar modificaciones tanto a nivel normativo, así como a nivel jurisdiccional, esto es en razón de los criterios adoptados por los magistrados para la calificación delictiva. Por lo mismo que resultará de utilidad incorporar como parte de la normativa penal, aquella la necesidad que lleva a reconocer esta acción lesiva sobre las mujeres por el único hecho de serlo, debe ser acreditada por el profesional especialista a fin de completar la evaluación de un tipo penal complejo como el de agresiones contemplado en el artículo 122 -B del ordenamiento jurídico penal. Además, se debe recomendar la asunción de criterios específicos destinados a la correcta evaluación de la conducta de agresión que conjugada al resultado lesivo pueda establecer una correcta punición de la conducta.

Es por tales razones por las que es posible señalar como validada tal variable lo cual se plasma de la siguiente manera:

No es completa la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo si no se ejecuta de la evaluación correcta y completa de la acción típica.

5.3. Contrastación de la hipótesis

Determinación final de la tesis

La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar se advierte de la presencia del elemento normativo “por su condición de tal”, por tanto, en su aplicación no es completa la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo si no se ejecuta de la evaluación correcta y completa de la acción típica.

Tabla 8: Contrastación de la hipótesis

Hipótesis inicial	Determinación final
La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar produce un efecto negativo sobre la eficaz intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo.	La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar se advierte de la presencia del elemento normativo “por su condición de tal”, por tanto, en su aplicación no es completa la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo si no se ejecuta de la evaluación correcta y completa de la acción típica.

Conclusiones

Conclusión general

Se llega a concluir que la complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar se advierte de la presencia del elemento normativo “por su condición de tal”, por tanto, en su aplicación no es completa la intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo si no se ejecuta de la evaluación correcta y completa de la acción típica.

Conclusiones específicas

Primera:

Se concluye en base a la interpretación del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar a fin de reconocer su complejidad, que es un tipo penal complejo, posee un factor ausente como elemento descriptivo del tipo, no especifica la conducta que describe, dificultando reconocer la responsabilidad penal y la posterior sanción, percibiéndose ello en base al archivamiento fiscal generando inseguridad, dado que su descripción no está basada en factores de tipo socioeconómico, psicológico y cultural, lo que traslada el problema a la estrategia de la política pública.

Segunda:

Se concluye luego de estudiada la teoría del ius puniendi para reconocer los elementos que permiten la acreditación del hecho delictivo, no se justifica de manera completa el hecho de haber creado un tipo especial para la sanción por acciones cometidas en el seno familiar, puesto que de acuerdo a la construcción típica de carácter complejo no es posible analizar la condición subjetiva del sujeto

activo, cuestión que resulta ser la única diferenciación con el ámbito de la lesiones o agresiones físicas; esto es se debe generar daño sobre la mujer por el simple hecho de serlo; advertir que existen tendencias o actitudes de odio hacia la mujer o por el hecho de ser mujer, no solo habría de bastar la ejecución de los actos violentos.

Tercera:

Se establece de acuerdo al análisis del nivel de intervención del ius puniendi por la acreditación del hecho delictivo respecto a las agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar en el ámbito jurisdiccional entre los años 2019 y 2021, que se presenta como tal la intervención del ius puniendi del Estado, pero que no es lo suficientemente efectiva lo cual se debe a una insuficiente acreditación del hecho delictivo en el tipo penal estudiado, en tanto que se enfoca únicamente en la determinación de la existencia de un efecto lesivo producido sobre la víctima como una cuestión de resultado del delito y luego la vinculación con el sujeto activo, mas no se concreta en ninguno de los casos analizados la evaluación de conducta lesiva del agente dirigida de manera intencional bajo el criterio de odio sobre la mujer por su condición de tal.

Cuarta:

Se determina como propuesta sobre el acondicionamiento de especificaciones técnicas que permitan el reconocimiento de la acción delictiva a fin de acreditar la responsabilidad del agente de una manera más eficiente, deben incorporarse cambios tanto a nivel normativo así como a nivel jurisdiccional, así en la construcción del tipo penal incorpora la acreditación del profesional especialista a fin de completar la evaluación de un tipo penal complejo como el de agresiones

contemplado en el artículo 122-B del ordenamiento jurídico penal. Además, se debe recomendar la asunción de criterios específicos destinados a la correcta evaluación de la conducta de agresión que conjugada al resultado lesivo pueda establecer una correcta punición de la conducta.

Recomendaciones

Primera:

Se recomienda al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la evaluación de la motivación de las sentencias que se emiten en virtud a la aplicación del tipo penal contenido en el artículo 122-B del Código Penal, en tanto que la evaluación de la conducta típica no es correcta, a fin de poder establecer una propuesta de cambio de criterio o en su defecto la propuesta de un pleno jurisdiccional nacional que permita discutir esta advertencia y se eleve a las instancias correspondientes para la evaluación o modificación del caso, sobre la manera de calificar el hecho delictivo complejo en virtud de lo señalado como ausente en la calificación, esto es el reconocimiento del carácter volitivo de agresión del hombre sobre la mujer por su condición de tal.

Segunda:

Se propone la incorporación de un criterio específico incrustado en el tipo penal para que luego del elemento normativo “por su condición de tal” se indique, “con la acreditación psicológica profesional” a fin de establecer un criterio de exigencia en la evaluación de la acción delictiva, puesto que la norma de por sí no ha logrado impulsar esta evaluación de manera adecuada la calificación delictiva correcta.

Bibliografía

- Bautista Peña, C. (2019). *Represión punitiva en el delito de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar y su implicancia al principio de mínima intervención del derecho penal, en las sedes judiciales de la provincia de Arequipa, incidencia en el año 2017*. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Obtenido de <http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/8576>
- Congreso de la República. (06 de Febrero de 2009). *Teorías de la pena*. Obtenido de http://www4.congreso.gob.pe/historico/cip/materiales/extorsion/Teorias_pena_investigacion.pdf
- García Loiza, K. (2018). *La aplicación de la pena en el delito de agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en los Juzgados Penales de Urubamba 2018*. Cusco: Universidad César Vallejo.
- Garrido Pajuelo, K., Postillo Alania, M., & Tarazona Trujillo, Y. (2018). Huánuco: Universidad Nacional Hermilio Valdizán.
- Granda Torres, G., & Herrera Abrahan, C. D. (2019). Análisis de los tipos penales y su importancia para determinar responsabilidad penal. *Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas*, V(7), 220-232. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7110480.pdf>

- López Pérez, L. (2012). El Poder Penal del Estado. *Universidad San Martín de Porres*, 1-7. Obtenido de https://derecho.usmp.edu.pe/instituto/revista/articulos/2012/El_Poder_Punitivo.pdf
- Orozco López, F. (2020). *Inaplicación de la pena suspendida en el delito de violencia familiar en la primera fiscalía los Olivos, 2018*. Lima: Universidad César Vallejo.
- Peña Cabrera Freyre, A. (2016). *Derecho Penal - Parte Especial*. Lima: Idemsa.
- Pérez Pinzón, Á. (2002). Violencia en el Ámbito Familiar y Doméstico. *Revista Penal N° 10, La Ley*.
- Pisfil, D. (2014). La prueba indiciaria y su relevancia en el proceso penal. *Revista de la Maestría en Derecho Procesal*, V(1), 119-147. Obtenido de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoprocesal/article/download/119-147/10825/>
- Plascencia Villanueva. (1995). Los medios de prueba en materia penal. *Instituto de Investigaciones Jurídicas- UNAM*(83). Obtenido de <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/issue/view/92>
- Quispe Ruiz, D. (2019). *Ineficacia del Derecho Penal y la reducción de la violencia familiar, lima sur 2018-2019*. Lima: Universidad Autónoma del Perú.
- San Martín Castro, C. (2014). *"Derecho Procesal Penal"*. Lima, Perú: Grijley.
- Vega Arrieta, H. (2016). El análisis gramatical del tipo penal. *Justicia*(29), 53-71. Obtenido de <http://www.scielo.org.co/pdf/just/n29/n29a05.pdf>

Zamora Acevedo, M. (2014). La búsqueda de la verdad en el proceso penal. *Acta Académica*(54), 147-186. Obtenido de <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33626.pdf>

Anexos

1. Formulario de encuesta a los expertos en derecho

Título: La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar como limitante del ius puniendi

- I. Variable independiente: “La complejidad del tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar”
 1. El tipo penal de agresiones contra la mujer o integrante del grupo familiar describe una acción violentista en contra de estos sujetos con la orientación de identidad de género.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opinan
 2. La configuración del tipo penal de agresiones se describe como uno de carácter complejo, pero no condiciona al juzgador la evaluación bajo estas características en cuanto a la acreditación del hecho delictivo.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opinan

3. Debe adecuarse la construcción del tipo penal de agresiones en el Código Penal a fin de establecer un parámetro que permita al juzgador asumir un criterio evaluador en función a la complejidad del tipo para reconocer el aspecto objetivo y subjetivo de la conducta.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opinan

II. Variable dependiente: “La intervención del ius puniendi mediante la acreditación del hecho delictivo”

4. El Ius Puniendi es una potestad que tiene el Estado para intervenir ante la existencia de actos que operan fuera de lo permitido de acuerdo al sistema jurídico a fin de imponer una sanción y conseguir la reeducación, resocialización y reinserción del delincuente a la sociedad.
 - a. De acuerdo
 - b. En desacuerdo
 - c. No opinan
5. La acción del Ius Puniendi requiere de la correcta identificación o acreditación del hecho delictivo a fin de imputar responsabilidad para poder sancionar, lo cual en el caso de los tipos penales complejos precisa de la evaluación objetiva y

subjetiva de la acción, lo cual no se advierte en el tipo de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opinan

6. Es necesaria una acción directa sobre la base típica del delito de agresiones a fin de que impulse la acción evaluadora del juzgador sobre el criterio de complejidad del tipo respetando la acción del Ius Puniendi en función a la correcta acreditación del hecho delictivo y la responsabilidad penal.

- a. De acuerdo
- b. En desacuerdo
- c. No opinan

Link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRxBv0XO380w4Z5wl6Jy5fEgVrL3XWmY3oymsYK6wNmeeQgw/viewform?usp=sf_link

2. Trámite de acceso a resoluciones judiciales del Poder Judicial del Distrito Judicial de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Presidencia

Chiclayo, 17 de noviembre del 2022.

Oficio No. 7521 - 2022 - P - CSJLA / P.J.

Señora:

Abog. Patricia del Pilar Cueva Sampén.-

Administradora del Módulo Corporativo Penal.-

Presente.-

Referencia: Carta de Presentación emitida por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.-

Me dirijo a usted, para saludarla cordialmente, y a la vez **REMITIRLE** la Carta de Presentación cursada por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mediante la cual **HACE DE CONOCIMIENTO** que la persona de Victor Almagro Espinoza Vásquez, egresado de la Escuela Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se encuentra realizando su Trabajo de Investigación de Tesis titulado: "La Complejidad del Tipo Penal de Agresiones contra la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar como limitante del Ius Puniendi", Y **SOLICITA** que se le brinde las facilidades en expedirle diez sentencias condenatorias y diez sentencias absolutorias, expedidas durante el período Agosto 2019 hasta la fecha, dictadas por el delito de Agresiones contra la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar, información que es necesaria para el desarrollo de su Trabajo de Investigación de Tesis. En virtud de lo expuesto, **PIDO** a usted, que de acuerdo a sus atribuciones, proceda a **EFECTUAR** las coordinaciones pertinentes, y **ATIENDA** directamente lo solicitado, **DANDO CUENTA** a ésta Presidencia de lo accionado, **sin afectar** sus actividades laborales propias de su función, bajo responsabilidad.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi especial consideración y estima personal.

ATENTAMENTE

JUAN RIQUELME GUILLERMO PISCOYA
PRESIDENTE

Corte Superior de Justicia de Lambayeque

JRGP/fmrs

Sede: "Manuel Lorenzo Emerson Huanal Naveda" - Av. José Leonardo Ortiz N°155 C.C. Chiclayo
Teléfonos: 074-481640 Anexo 22363- presidencia@csjla.gob.pe

Referencia: Carta de Presentación emitida por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.

Chiclayo, diecisiete de noviembre del año dos mil veintidós.

Dado cuenta con la Carta de Presentación cursada por el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mediante la cual **HACE DE CONOCIMIENTO** que la persona de Víctor Almagro Espinoza Vásquez, egresado de la Escuela Profesional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se encuentra realizando su trabajo de Investigación de Tesis, titulado: "La Complejidad del Tipo Penal de Agresiones contra la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar como limitante del *Ius Puniendi*", y **SOLICITA** que se le brinde las facilidades en expedirle diez sentencias condenatorias y diez sentencias absolutorias, expedidas durante el período Agosto 2019 hasta la fecha, dictadas por el delito de Agresiones contra la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar, información que es necesaria para el desarrollo de su Trabajo de Investigación de Tesis. Estando a lo expuesto, atendiendo a que es el mismo Decano de la Facultad de Derecho, quien está autorizando la realización de dicho Trabajo de Investigación **I.- AUTORIZÉSE** al Bachiller: **VÍCTOR ALMAGRO ESPINOZA VÁSQUEZ**, para **ACCEDER** a la información que solicita, para el desarrollo de su trabajo de investigación, **II.- PÓNGASE EN CONOCIMIENTO** de la Administradora del Módulo Corporativo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a fin de que de acuerdo a sus atribuciones, **EFFECTÚE** las coordinaciones pertinentes, y **ATIENDA** directamente lo solicitado, **DANDO CUENTA** a esta Presidencia de lo accionado, **sin afectar** sus actividades laborales propias de su función, **III.- CÚRSESE OFICIO** con tal finalidad, **IV.- Notifíquese.**

JRGP/fms


JUAN RIQUELME GUILLERMO PISCOYA
PRESIDENTE
Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Sede: "Mannuel Lorenzo Emerson Hnangul Naveda" - Av. José Leonardo Ortiz N°155 C.C. Chiclayo
Teléfonos: 074-481640 Anexo 22362- presidencia@csjla.pj.gob.pe

wd: REMITO CARTA DE PRESENTACIÓN SOLICITADA
mensaje

residencia CSJ Lambayeque <presidenciacsjla@pj.gob.pe>
ara: Tatiana Miluska Ortiz Guzman <tortiz@pj.gob.pe>

15 de noviembre de 2022, 16:11


Envío correo del Sr. Víctor Espinoza Vásquez, Remite carta de presentación solicitada, REF. solicitud. del 15/7/22
Atte
Margarita Ventura Z.
Mesa de Partes-Presidencia

----- Forwarded message -----

De: Víctor Almagro Espinoza Vásquez <victorev26@gmail.com>
Date: lun, 14 nov 2022 a las 18:35
Subject: REMITO CARTA DE PRESENTACIÓN SOLICITADA
To: <presidenciacsjla@pj.gob.pe>

2 adjuntos

 CARTA DE PRESENTACIÓN.docx (11).pdf
134K

 SOLICITUD PJ(1).pdf
255K



CARTA DE PRESENTACIÓN

Lambayeque, 2 de Noviembre del 2022

Señor

Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscoya

Presidente de la Corte Superior de Justicia

de Lambayeque

Presente.-

De nuestra especial consideración:

La presente tiene como finalidad expresarle mi cordial saludo, y a la vez presentar al joven **VÍCTOR ALMAGRO ESPINOZA VASQUEZ** identificado con DNI N° 71482138, egresado de la Escuela Profesional de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de esta Casa Superior de Estudios

El citado egresado se encuentra en la realización de su trabajo de investigación de la tesis titulado "**LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE AGRESIONES CONTRA LA MUJER O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR COMO LIMITANTE DEL IUS PUNIENDI**" por lo que se solicita brindar las facilidades de 10 sentencias condenatorias y 10 sentencias absolutorias periodo agosto del 2019 hasta la fecha, dictadas por el delito de Agresiones contra la Mujer o integrantes del Grupo Familiar (Art. 122 B del C.P), información necesaria para el desarrollo de su trabajo de investigación de la indicada tesis.

En espera de su atención a la presente, aprovecho la oportunidad para renovar las seguridades de nuestra mayor consideración.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

Dr. Esquivel B. Chayarrá Gotra
Dr. Esquivel B. Chayarrá Gotra
DECANO (E)

SOLICITO: INFORMACIÓN PARA TESIS DE PRE
GRADO

SEÑOR DOCTOR:
JUAN RIQUELME GUILLERMO PISCOYA
PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

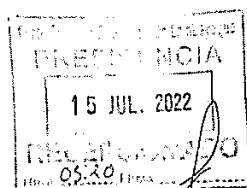
VÍCTOR ALMAGRO ESPINOZA VÁSQUEZ,
identificado con DNI N.º 71482138, con domicilio real
en la Residencial El Jockey Block X – Dpto. 501 –
Distrito La Victoria, con correo electrónico
victorev26@gmail.com, número de celular: 993 608
361; a usted digo:

Tengo el honor de dirigirme a Ud., saludándolo
cordialmente y a la vez, **SOLICITARLE** sirva disponer a quien corresponda se me facilite
(10) diez sentencias condenatorias y (10) diez sentencias absolutorias - período agosto del
2019 hasta la fecha, dictadas por el delito de Agresiones contra la Mujer o integrantes del
Grupo Familiar (Art.122-B del C.P), información que es necesaria e indispensable para el
desarrollo de la investigación de tesis titulado "LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE
AGRESIONES CONTRA LA MUJER O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR COMO
LIMITANTE DEL IUS PUNIENDI" del suscrito -Bachiller en Derecho por la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo; dicha información se hará llegar al correo electrónico
consignado.

Por tanto:

Pido a Ud. Señor Presidente de la Corte Superior
de Justicia de Lambayeque, acceder a mi solicitud por ser de justicia.

Chiclayo, 15 de julio del 2022



VÍCTOR ALMAGRO ESPINOZA VÁSQUEZ
DNI: 71482138

Escaneado con CamScanner

**SUMILLA: REITERO SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE COPIAS DE
EXPEDIENTES JUDICIALES PARA TESIS DE PREGRADO**

Señor Doctor:

EDILBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ TANTA

PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

VÍCTOR ALMAGRO ESPINOZA VÁSQUEZ, identificado con DNI
N.º 71482138, con domicilio real en la Residencial El Jockey
Black X-Dpto. 501 Distrito La Victoria, con correo electrónico
victorev26@gmail.com, celular: 993 608 361, a usted digo:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, saludándolo cordialmente y a la vez, poner en conocimiento que, el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Riquelme Guillermo Piscoya remitió el OFICIO N.º 7521-2022-P-CS/JLA/PJ, de fecha fecha 17 de noviembre de 2022, dirigido a la abogada Patricia del Pilar Cueva Sampén -Administradora del Módulo Corporativo Penal, en la cual ordena proceder a efectuar las coordinaciones pertinentes y atender directamente lo solicitado, esto es, (10) diez sentencias condenatorias y (10) diez sentencias absolutarias - período agosto del 2019 hasta la fecha, dictadas por el delito de Agresiones contra la Mujer o integrantes del Grupo Familiar (Art. 122-B del CP), información que es necesaria e indispensable para el desarrollo de la investigación de tesis titulado "LA COMPLEJIDAD DEL TIPO PENAL DE AGRESIONES CONTRA LA MUJER O INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR COMO LIMITANTE DEL IUS PUNIENDI". En ese sentido, **REITERO SOLICITUD**, por cuanto a la fecha no se me ha contestado con lo solicitado, información que es importante y urgente, puesto que el plazo de presentación del informe final de tesis está próximo a vencer.

Por tanto, pido a usted señor presidente, acceder a mi solicitud por ser de justicia.

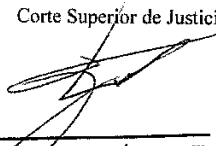
Chiclayo, 09 de enero de 2023



Victor Almagro Espinoza Vásquez
DNI N.º 71482138

Referencia: Correo electrónico en relación al Oficio N° 712-2022-A. NCPP-CSJLA/PJ
Chiclayo, nueve de enero de dos mil veintitres

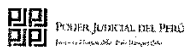
DADO CUENTA en atención al oficio de la referencia, enviado por la Administradora del Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dra. Patricia del Pilar Cueva Samper, mediante el cual alcanza la información solicitada por Oficio N°7521-2022-P-CSJLA/PJ, en ese sentido se dispone: **I) NOTIFICAR** al Señor Víctor Almagro Espinoza Vásquez, al correo electrónico victorev26@gmail.com, con las copias de las sentencias remitidas por la Administradora del Módulo Penal Corporativo Penal de esta Corte Superior de Justicia. **II) NOTIFÍQUESE.-**



EDILBERTO JOSE RODRIGUEZ TANTA
Presidente
Corte Superior de Justicia de Lambayeque

5/1/23, 14:11

Correo de PODER JUDICIAL DEL PERU - Re: PRESIDENCIA LAMBAYEQUE. REMITE: OF., N° 7521-2022-P.



Presidencia CSJ Lambayeque <presidenciacsjla@pj.gob.pe>

Re: PRESIDENCIA LAMBAYEQUE. REMITE: OF., N° 7521-2022-P.

Lady Milagros Cubas Barboza <lcubasb@pj.gob.pe>

4 de enero de 2023, 18:04

Para: Presidencia CSJ Lambayeque <presidenciacsjla@pj.gob.pe>

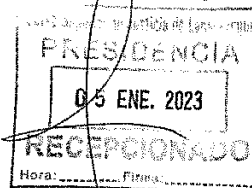
Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscocoy.

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Ciudad. -

Hago llegar mi cordial saludo, por encargo de la Administración del Módulo Penal de esta Corte Superior de Justicia, se remite información solicitada en Oficio N.º 7521 -2022-P-CSJLA-PJ, Anexado al presente para conocimiento y fines pertinentes. Att.

--
Abg. Lady Cubas Barboza
Asistente Administrativo
Administración NCPP-CSJLA



11 adjuntos

- 14405-2019 cond9.pdf
216K
- 10100-2021 condena.pdf
107K
- 10065-2021 cond.pdf
202K
- 5172-2021 concenatoria.pdf
144K
- 2383-2022 condenatoria.pdf
209K
- 2317-2021- condenatoria.pdf
227K
- 735-1-2021 conde.pdf
158K
- 5583-2021 absolutoria.pdf
122K
- 11198-2018 ABSOLUTORIA.pdf
121K
- 02-2022 ABSOLUTORIA.pdf
383K
- OFICIO N°712 RESPUESTA 7521.pdf
172K

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ecae97dbce&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1754134932640655690&simpl=msg-f%3A1754134932...> 1/1



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

Administración Módulo Penal - CPP

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Chiclayo, 28 de diciembre de 2022

Oficio N° 712 -2022-A. NCPP-CSJLA/PJ.

Dr. Juan Riquelme Guillermo Piscoya.

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque

Ciudad. -

Referencia: OFICIO N° 7521- 2022-P-CSJLA/PJ

Tengo el honor de dirigirme a usted, saludándolo respetuosamente y, en atención al documento de la referencia, donde el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, pone de conocimiento que el sr. Victor Almagro Espinoza Vásquez, es egresado de la carrera de Derecho, y se encuentra realizando su trabajo de investigación titulado "La Complejidad de del tipo penal Agresiones contra la Mujer o Integrantes del Grupo Familiar como limitante del Ius Puniendi", en ese sentido solicita se le brinde las facilidades a citado estudiante de recabar diez sentencias condenatorias y absolutorias expedidas en el periodo 2019 hasta la fecha, al respecto informo:

Que se ha realizado la búsqueda en el Sistema Integrado judicial (SIJ) de lo que se ha podido extraer la información solicitada la cual es anexada al presente para conocimiento y fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de especial consideración y estima.

Atentamente,


ABG. PATRICIA DEL PILAR CUEVA SAMPER
Administradora
Módulo Corporativo Penal
P.J. - NCPP - CSJLAMB